

## **CAPÍTULO V**

### **CRISIS, DESARTICULACIÓN Y RETROCESO DEL MUNDO LABORAL, 1955-1983**

**Florencia Gutiérrez – María Paula Parolo**

#### **1- Presentación**

Entre el golpe de Estado de 1955 y la recuperación de la democracia en 1983 la clase trabajadora tucumana atravesó uno de los periodos más complejos de su historia, en tanto tuvo que sobreponerse a las recurrentes crisis económicas, resistir la decidida voluntad gubernamental de dismantelar el más importante aparato productivo provincial y fue víctima de las políticas represivas estatales, particularmente desde 1975. Para adentrarnos en este trayecto de la historia del universo laboral decidimos privilegiar, por su gravitación socio-económica, a los actores azucareros. Asimismo, optamos por organizar los problemas de estudio en tres grandes apartados. El primero se extiende entre 1955 y 1966 y analiza la “resistencia” obrera frente al derrocamiento de Perón, así como las recurrentes crisis azucareras, sus infructuosas salidas y, por ende, las respuestas obreras. La segunda etapa centra su análisis en el periodo 1966-1976, periodo marcado por el cierre de once ingenios azucareros y sus dramáticas consecuencias socio-laborales. El último se extiende entre 1976 y el retorno democrático, es decir, el año 1983 y hace foco en la política represiva que se abatió sobre el mundo laboral durante la última dictadura militar.

#### **2- PRIMERA ETAPA (1955-1966): Los prolegómenos de la gran crisis**

##### *2.1 El derrocamiento de Perón y la resistencia obrera.*

Como fue señalado por Juan Carlos Torre, los cambios operados durante la primera década peronista (1946-1955) integraron política y socialmente a los trabajadores a la comunidad nacional y convirtieron al sindicalismo en uno de los actores principales de la vida país. Sin embargo, esta integración fue severamente cuestionada y limitada por el golpe de Estado que, en septiembre de 1955, derrocó al presidente Juan Domingo Perón. A grandes rasgos, el proyecto que amalgamó la historia nacional a partir de ese momento, y que tuvo como telón de fondo la larga proscripción del peronismo, fue el de “disminuir la gravitación alcanzada por los trabajadores organizados” con un triple propósito: a) revertir la distribución del ingreso para reconstruir los

beneficios de las empresas y alentar nuevas inversiones; b) acrecentar la libre disponibilidad de la fuerza de trabajo para ponerla al servicio de la racionalización de la estructura productiva; c) crear un orden político menos dependiente del sostén activo de los trabajadores”, en gran medida, identificados con el peronismo (Torre, 2004, p.1).

Consumado el golpe de Estado, los primeros meses del gobierno provisional comandado por Eduardo Lonardi implicaron una tregua frente al movimiento sindical peronista. La conciliatoria expresión de que en la Argentina posperonista no habría “ni vencedores, ni vencidos”, utilizada por Lonardi al jurar como presidente, simbolizó la búsqueda de un condicionado acercamiento entre el gobierno y el sindicalismo. Sin embargo, a escasos meses, esa intención reveló su imposibilidad y fue sustituida por una dura política antiperonista comandada por Pedro Eugenio Aramburu, quien asumió como presidente provisional en noviembre de 1955.

Con Lonardi, una de las expresiones que adquirió la política de avenencia con el gremialismo fue la continuidad de la dirigencia peronista en la CGT, al igual que en muchos sindicatos. En Tucumán, como fue analizado por Ana Josefina Centurión, esta breve tregua posibilitó la persistencia de la dirigencia peronista en los sindicatos más importantes pero, al unísono, comandos civiles y grupos de trabajadores “libres” (radicales y socialistas, principalmente) realizaron diversas acciones destinadas a apoderarse de los sindicatos controlados por el peronismo. El hostigamiento liderado por los comandos civiles generó serias dudas sobre la capacidad de Lonardi para cumplir con su proyecto político tendiente a aceptar el liderazgo del peronismo entre la clase trabajadora a condición de “depurar” cierta dirigencia y restringir la representación de los trabajadores a la esfera estrictamente gremial. Como señala Daniel James, un segundo factor, aún más decisivo que estos ataques, fue el accionar de las bases peronistas, es decir, la resistencia ofrecida por la militancia peronista de base al golpe de Estado contra Perón y la respuesta oficial articulada contra esta resistencia (James, 2005, pp. 75-77).

En Tucumán, ciertos episodios, como los incendios de cañaverales, los sabotajes fabriles, la paralización de las actividades productivas y la adhesión a la jornada del 17 de octubre, histórica celebración peronista que conmemoraba la participación popular en la liberación de Perón en 1945, pueden ser interpretados como las primeras expresiones de resistencia de las base peronistas, estrategias “espontáneas, instintivas y confusas” destinadas a manifestar la disconformidad frente al derrocamiento de Perón (James, 2005). En efecto, el 17 de octubre de 1955 el ausentismo y distintas formas de disconformidad fueron particularmente llamativas entre los trabajadores

azucareros, como contrapunto, la respuesta estatal no tardó en desplegarse a través de múltiples detenciones (Centurión, 2004). En el ingenio Bella Vista se detuvo a un grupo de vecinos acusados de atentar contra la libertad de trabajo; un dirigente de la filial fotiana de Colombres fue aprehendido por un “subcomando civil de los que actuaron en el interior de la provincia”; y en otro ingenio se detuvo a 19 trabajadores de fábrica y surco acusados de ser

“autores de actos y rumores alarmistas y proferir expresiones adversas al actual gobierno y de simpatía al depuesto sin perjuicio de ocasionar daños, como ser rotura de vidrios y atentar contra la libertad individual de algunos de sus compañeros de tareas, al parecer con el propósito de que éstos se adhirieran a su actitud. Fueron traídos en camiones del cuerpo de bomberos, fuertemente escoltados por efectivos de la guardia de infantería”.<sup>1</sup>

Asimismo, Centurión destaca la defensa del liderazgo sindical peronista por las bases, cuya expresión más contundente fue la oposición frente a la toma de distintos gremios por grupos antiperonistas. Este posicionamiento fue el asumido por los trabajadores ferroviarios, quienes impulsaron la recuperación de la seccional Tafí Viejo con el fin de restituir a sus autoridades; y el asumido por la Asociación Viajantes de Comercio frente a los rumores que indicaban la toma del sindicato por “personas ajenas al gremio”. En tal sentido, de un total de 23 sindicatos tomados, once fueron recuperados por las anteriores autoridades, tres fueron intervenidos a pedido de las autoridades desplazadas y dos quedaron a cargo de comisiones mixtas. Asimismo, cinco sindicatos más declararon haber realizado asambleas o reuniones donde las directivas pusieron a disposición sus renuncias pero éstas fueron rechazadas (Centurión, 2004, p.4).

En el caso de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) recordemos que en julio de 1955, es decir, pocos meses antes del golpe de Estado, el proceso de intervención decidido a fines de 1949 –después de la “huelga larga”– había llegado a su fin, lo que implicó un sustancial avance en el prolongado proceso de normalización sindical. La primera reacción de la dirigencia fotiana fue de expectación, al igual que la actitud asumida por la Confederación General del Trabajo (CGT) que, reflejada en la respuesta al discurso de Lonardi (“ni vencedores, ni vencidos”), subrayaba “la necesidad de mantener la más absoluta calma [...] cada trabajador en su puesto por el camino de la armonía”.<sup>2</sup> El llamado de FOTIA a mantener la tranquilidad y continuar con la zafra se conjugó con las crecientes ocupaciones de los

---

<sup>1</sup> *La Gaceta*, 21 de octubre de 1955. Citado en Centurión, 2005, p. 5.

<sup>2</sup> Citado en James, 2005, p. 70.

sindicatos por grupos antiperonistas. La Federación, en consonancia con el acuerdo entre la CGT y el gobierno nacional –que estipulaba la celebración de elecciones en todos los gremios en un lapso de 120 días–, declaró una amnistía general y el llamado a elecciones. Dirigentes azucareros, muchos de ellos desplazados de la vida gremial después de la huelga de 1949, ganaron protagonismo al intentar recuperar la dirección de los sindicatos. Con este avance procuraban evitar que “elementos extraños a los intereses gremiales” avanzaran sobre la Federación obrera. La activa oposición a la injerencia de los “trabajadores libres” en la conducción sindical, es decir, de dirigentes vinculados al antiperonismo, reveló el reconocimiento y capacidad de las bases para, en este primer momento, sostener a sus dirigentes sindicales y procurar defender las conquistas ganadas durante la década peronista (Centurión, 2004 y 2005).

Sin embargo, en noviembre de 1955, el nuevo gobierno provisional encabezado por Pedro E. Aramburu dejó atrás la política de conciliación de Lonadri y se propuso liquidar “la persistente influencia peronista en todos los niveles de la sociedad argentina”. Podemos señalar que la tarea “desperonizadora”, es decir, la erradicación de la presencia e influencia del peronismo en el conjunto social se articuló en torno a tres ejes: a) la proscripción legal de un segmento de dirigentes sindicales peronistas con el propósito de apartarlos de la vida gremial, decisión que se conjugó con la intervención de la CGT; b) el avance de una política de intimidación y represión del sindicalismo; c) el acuerdo entre el gobierno y los empleadores cuyo norte sería la productividad y la racionalización del trabajo, cuyas expresiones más claras fueron el intento de frenar las subas salariales y reestructurar el sistema de negociaciones colectivas (James, 2005, p. 83).

En Tucumán, como en el resto del país, se multiplicaron las detenciones de trabajadores y se allanó la sede de la CGT Regional y de FOTIA, medidas represivas que fueron respondidas por los trabajadores con la paralización de labores y distintas formas de sabotaje, especialmente entre los azucareros, los ferroviarios y los cerveceros. Finalmente, el 16 de noviembre de 1955 el gobierno decidió la intervención de la CGT y de todos los sindicatos que la conformaban, medida que obviamente alcanzó a la Federación obrera azucarera. Frente a la avanzada antiperonista y como forma de defensa, “los trabajadores iniciaron el proceso de reorganización espontánea y localizada que la cultura política peronista llegaría a conocer como *la resistencia*” (James, 2005, p.124). En tal sentido, las prácticas de la resistencia se articularon a través de comités de base extraoficiales e implicaron un conjunto de acciones como el sabotaje, las huelgas salvajes y el trabajo a desgano, luchas que confirmaron la identidad peronista de la clase obrera.

En el caso tucumano, diversos testimonios nos devuelven las particularidades de la resistencia peronista que, entre sus prácticas, asumió la conformación de estructuras sindicales paralelas a las intervenciones. Así lo recuerda un trabajador de la época:

“En el caso nuestro, de cerveceros, le dejaron la intervención a un mayor del ejército que no sabía nada. Ellos tomaron el edificio, nosotros nos quedábamos en las fábricas y hacíamos las asambleas ahí, que era una forma de resistir. Como teníamos delegados por secciones, el encargado de sección le pasaba el comunicado al otro delegado y así sucesivamente [sobre alguna] reunión”.<sup>3</sup>

Su testimonio también posibilita recuperar las prácticas que jalonaron otra de las expresiones de la resistencia, específicamente, la organización de una central obrera clandestina:

“Cuando la cúpula provincial de la CGT se disuelve, y otros quedan presos, nosotros hicimos un secretariado paralelo a la intervención de la CGT, con hombres de distintos gremios. En esas reuniones clandestinas se difundían las consignas. La consigna era ‘donde no está la fuerza, todo; donde está la fuerza, nada’. Es decir, donde estaba el ejército o la policía para reprimir si había una reunión, ahí éramos todos ángeles. Y adonde no estaba la fuerza, la gran reunión. Y era, no solamente desde el punto de vista gremial, sino desde el gremial-político: éramos todos peronistas”.<sup>4</sup>

La resistencia obrera a la ofensiva emanada del gobierno de Aramburu implicó la defensa de las conquistas socio-laborales alcanzadas durante la década peronista, derechos cuestionados que parecían a punto de perderse. En este sentido, y, a contramano de lo deseado por la autodenominada “revolución libertadora”, los embates reforzaron la identificación entre Perón y los obreros. En Tucumán, particularmente desde principios de 1956, este proceso de resistencia se conjugó con la amenaza, cada vez más cercana, del cierre de fábricas azucareras. Los primeros signos de alarma se expresaron en los despidos realizados por la patronal de los ingenios Esperanza, La Corona, Mercedes y Amalia. Como respuesta, a nivel nacional, se conformó el Comité de Relaciones Intersindicales, que también logró organizarse en Tucumán para

---

<sup>3</sup> Entrevista al Sr. Ávila realizada por Josefina Centurión, 5 de septiembre de 2002. Citado en Centurión, 2004.

<sup>4</sup> Entrevista al Sr. Ávila realizada por Josefina Centurión, 5 de septiembre de 2002. Citado en Centurión, 2004.

articular la defensa obrera (libertad sindical, exigencia de reapertura de gremios, fijación de precios máximos para productos de primera necesidad, etc.).

En este contexto, una de las medidas de fuerza más importantes fue la huelga azucarera de marzo de 1957 que, nacida de las desavenencias vinculadas al pago de retroactividades obreras, permite ponderar el cuestionamiento de los sindicatos de base a las autoridades de la intervención de FOTIA, a quienes acusaban de “incapacidad” para representarlos y para acompañarlos en las medidas de fuerza. Por su parte, el interventor fotiano argumentó que “no es con un movimiento de fuerza como van a asegurar el derecho obrero, si antes no se han agotado los medios regulares” y acto seguido responsabilizó de lo sucedido a “quienes están lanzando a sus compañeros a la aventura de una huelga ilegal”.<sup>5</sup> El reclamo del interventor aludía a la resistencia obrera extendida a lo largo de la geografía azucarera y al permanente desborde sufrido por estas autoridades en razón de las acciones y demandas de las bases claramente identificadas con el peronismo (Centurión, 2004, p. 15).

## *2.2 Crisis de sobreproducción e impacto de la política económica frondizista en el mundo del trabajo azucarero: el aumento de la conflictividad laboral*

A partir de 1958, la compleja situación del mundo del trabajo azucarero se agudizó con la eliminación del Fondo Regulador que, establecido en 1950, implicaba un complejo sistema de compensaciones destinado a beneficiar a los ingenios de menor rendimiento. En este contexto, la sensible disminución de los créditos a los ingenios tucumanos “en beneficio de los ingenios salto-jujeños, más concentrados y ‘eficientes’ agudizaron los efectos de una crisis de mercado en un contexto internacional de profunda caída de los precios del azúcar (Campi-Bravo, 2010, p. 28). La liquidación del “sistema de protección distributiva”, resistido por las empresas del Norte (Salta y Jujuy), comenzó a partir de 1954 pero fue con el golpe de Estado de 1955 y, particularmente, bajo la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962) cuando se avanzó decisivamente en su eliminación (Murmis y Waisman, 1969).

La llegada de Arturo Frondizi, representante de la Unión Cívica Radical Intransigente a la presidencia de la Nación, fue posible en razón del acuerdo con Juan D. Perón. A cambio de los votos peronistas, Frondizi prometió la restitución de la CGT, la convocatoria de elecciones en los sindicatos aún no normalizados y la vuelta al sistema de negociaciones colectivas sustentado en

---

<sup>5</sup> *La Gaceta*, 19 de marzo de 1957. Citado en Centurión, 2005.

sindicatos nacionales centralizados. El “contraste con el gobierno militar parecía evidente”, en tanto la figura de Frondizi sintetizaba la recuperación de las conquistas y derechos socio-laborales arrancados por el régimen militar. “Esa fue la lógica que Perón aceptó al ordenar a sus seguidores que votaran por el candidato de la UCRI en las elecciones de febrero de 1958” (James, 2005, p. 127).

En Tucumán, la gobernación quedó en manos del también ucrista, Celestino Gelsi. Como parte del cumplimiento de las promesas oficiales llegó la normalización de FOTIA que, en mayo de 1959, proclamó a Benito Romano como secretario general de la Federación. Como contrapartida, el sindicalismo azucarero tuvo que hacer frente a las duras implicancias de la política agroindustrial frondizista encabezada por el ministro de economía, Álvaro Alsogaray. A partir de 1959, el norte del ensayo desregulador fue “crear las condiciones competitivas a través de la liberalización del mercado para mejorar los rindes cañeros y promover el reequipamiento industrial”. La promoción de este último, especialmente orientado a dos grandes ingenios de Salta y Jujuy y, como contrapunto, la progresiva y sensible reducción del crédito oficial a muchos ingenios tucumanos, decisión agudizada por la inestabilidad de los precios luego de la gran zafra de 1958, impactarían seriamente en la esfera laboral azucarera y revelarían sus consecuencias más drásticas a mediados de los años sesenta (Campi y Bravo, 2010, p.29).

Sobre este telón de fondo, el aumento del costo de vida y la caída de los salarios reales convirtieron la paritaria azucarera de 1959 en un nudo de difícil resolución. El sindicalismo azucarero, es decir, las organizaciones de obreros y empleados de Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Santa Fe, se organizaron en el denominado Frente Único Nacional de Trabajadores Azucareros (FUNTA) que demandó un aumento del 90% hasta octubre de ese año, es decir, hasta que culminara la zafra. La imposibilidad de avanzar en las negociaciones colectivas y alcanzar las reivindicaciones condujo a la declaración del paro de actividades pero los gremios organizados en el Frente asumieron posiciones distintas. Mientras FOTIA tomó la posición más combativa al declarar la huelga por tiempo indeterminado, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y los sindicatos de Salta, Jujuy, Santa Fe y Chaco propusieron un paro escalonado. En Tucumán la huelga se extendió entre el 23 de julio y el 12 de agosto, es decir, a lo largo de 21 días y alcanzó ribetes dramáticos. El 7 de agosto, cuando se concretaba el segundo día de paro declarado por la Delegación Regional de la CGT –como muestra de adhesión y apoyo a la huelga azucarera–, una nutrida movilización obrera se congregó en la sede de FOTIA y fue reprimida por la policía cobrándose la vida del trabajador, Manuel Reyes Olea (Azcoaga, 2014(b), pp. 10-11). La respuesta de FOTIA no se hizo

esperar y se dirigió a condenar “la incalificable masacre de que fueron objeto nuestros compañeros por fuerzas policiales” y a responsabilizar “al señor gobernador de la provincia, ya que en las palabras se manifiesta ‘amigo de los trabajadores’ y en los hechos demuestra ser un digno representante de los más crudos gobiernos reaccionarios que haya padecido la provincia”.<sup>6</sup>

El 10 de agosto, el Ministerio de Trabajo intimó a FOTIA a levantar la huelga pero ante la negativa sindical de acatar la resolución, Alsogaray declaró ilegal la medida de fuerza y le retiró la personería gremial. Finalmente, el día 13 se alcanzó un acuerdo que puso fin al paro. Los industriales se comprometieron a abonar el 70% de aumento salarial, efectivizar una ayuda económica a los obreros por los días de huelga y abonar los salarios familiares. Los cañeros también accedieron al mismo incremento salarial. Aunque en los días siguientes FOTIA tuvo que iniciar las negociaciones destinadas a recuperar la personería gremial, lo que finalmente sucedería en mayo de 1961, y esperar la homologación del convenio, sus dirigentes consideraron los resultados de la huelga como un éxito (Azcoaga, 2014(a), p.13). En palabras de Graciela Romano, la huelga azucarera, en la que participaron aproximadamente 80.000 trabajadores, quienes alcanzaron un sensible aumento salarial, fue la “única triunfante del periodo frondizista” (Romano, 2009, p. 9).

Asimismo, la medida de fuerza consolidó el papel de FOTIA como representante del peronismo proscripto, identificación que se reflejó en las elecciones de marzo de 1962, ocasión en que el partido laborista incluyó en su lista de candidatos a referentes fotianos opositores a las políticas frondizistas (Nassif, 2016, p. 153). Una simbólica expresión de la mayoritaria identidad peronista de los obreros azucareros se generó en 1958 cuando, a pesar de la intervención de FOTIA, los trabajadores lograron establecer el 17 de octubre como día del Trabajador Azucarero. Esta celebración asumió particulares connotaciones al año siguiente cuando los obreros realizaron paros simbólicos de 15 minutos por turno y actos para homenajear la memoria de Evita y del obrero Reyes Olea, muerto en la huelga de 1959 (Azcoaga, 2014 (b), p. 14).

La situación azucarera, lejos de mejorar se recrudecería. La acumulación de los excedentes de la zafra de 1958 y 1959 condujo a una brusca caída de los precios, situación que agudizó la situación azucarera e impulsó a las autoridades provinciales a solicitar medidas urgentes del gobierno nacional. Mientras se aproximaba la zafra de 1960, los pedidos para exportar el azúcar acumulado y aumentar la financiación oficial a los ingenios se

---

<sup>6</sup> *La Gaceta*, 8 de agosto de 1959. Citado en Azcoaga, 2014(b), p. 12.



profundizaron. En este contexto, el recrudecimiento de la crisis fue el argumento utilizado por los industriales para no abonar los aumentos convenidos luego de la huelga y demorar el pago de salarios y derechos laborales (como el aguinaldo). Al unísono, “numerosos ingenios comenzaron a enviar preavisos de despido en masa y a realizar cierres temporarios de sus establecimientos”; por su parte, los plantadores de caña “suspendieron muchas de las tareas de los obreros de surco”. Frente a esta situación una de las múltiples respuestas de los trabajadores fueron las denominadas marchas del hambre y la desocupación (Azcoaga, 2014 (b), p. 16).

Durante la gobernación de Gelsi, otra de las expresiones de la crisis azucarera fue la gran movilización cañera de junio de 1961 liderada por pequeños y medianos plantadores nucleados en UCIT y apoyada por FOTIA. Los cañeros demandaban a los empresarios el pago de la materia prima de las zafras de 1959 y 1960. La “marcha del hambre” evidenció “el componente explosivo” que significaba la alianza entre los obreros y los cañeros. Esta convergencia de actores implicó un amplio y dinámico movimiento de protesta que, articulado desde los pueblos y localidades del interior, convergió en la capital, en la puerta misma de la Casa de Gobierno, y puso de manifiesto la “capacidad de movilización y de despliegue” de las organizaciones azucareras” (Nassif, 2016, p. 154).

La crisis azucarera gravitó en el universo laboral y frente a la decisión de los industriales de cerrar temporalmente las fábricas y suspender las actividades productivas, como forma de atenuar los costos productivos, los trabajadores desplegaron modalidades de protesta que comenzaron a evidenciar el desplazamiento de las “luchas ofensivas” –por mejoras de salarios– en favor de la primacía de las “luchas defensivas” destinadas a preservar las fuentes de trabajo. En este clima, en febrero de 1962 los obreros del Santa Lucía, jaqueados por los despidos, las amenazas de receso y de cierre de la fábrica agudizaron sus demandas. La ocupación del ingenio y distintos hechos de violencia desataron una dura represión policial que no logró sofocar la protesta, la que se extendió durante más de un mes y concitó una gran apoyo de la comunidad local (Centurión, 2012, pp.390-391). Ese año también tuvieron lugar las elecciones de gobernador, convocadas para marzo de 1962, y Tucumán fue una de las cuatro provincias en las que triunfaron candidatos neoperonistas, victoria que trajo aparejada la intervención federal decidida por Frondizi. Pocos días después, el Presidente era desalojado del gobierno a manos de los militares. En Tucumán, luego del derrocamiento de Gelsi cuatro interventores se sucedieron en el poder ejecutivo, hasta octubre de 1963, cuando Lázaro Barbieri asumió la gobernación como candidato de la UCR del Pueblo.

Como fue analizado por Centurión, el Santa Ana, signado desde 1961 por una ley de privatización, se convirtió en el ícono de la crisis azucarera. En esta fábrica, la suspensión de la molienda de 1963 implicó desocupación y miseria pero también la articulación de formas de descontento y protesta. Así, en una asamblea convocada por el sindicato obrero y el de empleados se decidió la ocupación del ingenio para exigir el pago de salarios y los beneficios sociales adeudados; asimismo, repudiaron la liquidación del ingenio y demandaron formar una comisión mixta para solucionar su futuro laboral. La ocupación duró cinco días, hasta que las fuerzas policiales cercaron el pueblo y obligaron a levantar la medida tras el compromiso del gobierno de analizar las posibilidades de que una cooperativa tome se haga cargo del ingenio (Jemio, 2012). El sino de los despidos y la privatización de la fábrica administrada por el Estado provincial se conjugó con distintos proyectos destinados a evitar su cierre, como el de conformar una sociedad anónima entre el Estado, los cañeros y los trabajadores o promover un proceso de colonización a través de la división de la tierra pero ninguno alcanzó a suscitar el consenso necesario para lograr su concreción.

En razón de la gravedad del problema, FOTIA decidió no iniciar la zafra hasta que éste se resolviera, decisión que se complejizó con el inicio de las negociaciones paritarias para la cosecha de ese año, en la que los trabajadores solicitaron un aumento salarial del 70%. Frente a la negativa de los industriales, la Federación obrera, en el mes de julio, declaró una huelga, medida decidida en conjunto con la FUNTA y FEIA que alcanzó un rotundo acatamiento (Centurión, 2012, pp. 396-397). Alrededor de 150.000 obreros y empleados paralizaron 26 de los 27 ingenios provinciales y se realizaron concentraciones y manifestaciones que llevaron a violentos enfrentamientos con la policía en Famaillá. La comisión directiva de FOTIA, respondió a los comunicados de los industriales declarando que

“los trabajadores van a la lucha convencidos de la cerrada intransigencia patronal que, como todos los años, dilata innecesariamente las conversaciones e intenta convencer a la opinión pública de sus intenciones de pacificación. En estos últimos años de la mal llamada crisis azucarera han sido perfeccionadas las fábricas y se sustentó una política de neto corte comercial mientras los trabajadores padecen hambre, cesantías y encarcelamiento. Ustedes pueden concedernos una sustancial

mejora: no nos engegucemos pero somos sinceros: sin ello no habrá solución”.<sup>7</sup>

Los industriales consideraron que el reclamo de aumento salarial era injustificado y excedía lo gremial; los cañeros se proclamaron en contra del paro y pidieron se considere ilegal. Finalmente, la declaración de ilegalidad de la medida, por parte del Ministerio de Trabajo, se conjugó con una severa represión policial. De esta forma, el 15 de julio se levantó la huelga tras un acuerdo de incremento salarial del 35% desde 1964 (Jemio, 2012)

### *2.3 Agudización de la crisis azucarera y respuesta obrera (1963-1966)*

A principios de los años sesenta, la conducción de FOTIA estaba conformada “por dirigentes jóvenes que se habían forjado en el gremialismo a través de la lucha a partir del golpe de Estado de 1955 y luego bajo el frondizismo [...] y viejos dirigentes que, como Benito Romano, tenían una destacada trayectoria en el sindicalismo azucarero” Estos dirigentes tuvieron que enfrentar las múltiples derivaciones de la crisis azucarera: el desplazamiento de la mano de obra producto de la racionalización fabril y la tecnificación en los surcos, las amenazas de despido y de cierre de los ingenios (Nassif, 2016, pp. 159-162).

En medio de esta compleja situación, Lázaro Barbieri –candidato independiente de la Unión Cívica Radical del Pueblo– asumió, en el mes de octubre de 1963, la gobernación de Tucumán. A nivel nacional Arturo Illia se hizo cargo de la presidencia (1963-1966). La gestión de Barbieri estuvo marcada por las turbulencias sociales derivadas de la crisis de sobreproducción azucarera y la política agroindustrial nacional, a la que se agregaba la del erario público, incapaz de pagar los salarios de los empleados estatales ni cumplir con los compromisos del endeudamiento por obras públicas. Así, los conflictos, huelgas y manifestaciones formaron parte del paisaje cotidiano de los tucumanos, tanto en la ciudad capital como en los pueblos y rutas del interior de la provincia.

En lo que respecta a la cuestión azucarera, en 1964, en el marco del Plan de Lucha impulsado por la CGT, se llevaron a cabo múltiples tomas de establecimientos fabriles, marchas y cortes de rutas que continuaron al año siguiente, ejemplo de la propagación de la protesta obrera fueron la ocupación de los ingenios San José, Amalia, Trinidad y Bella Vista. En marzo de 1965, FOTIA y UCIT firmaron un pacto en procura de encontrar una solución de fondo al problema azucarero, a través de un manifiesto propusieron “la destrucción de

---

<sup>7</sup> Citado en Centurión, 2005, pp.15-16.

los poderes monopolistas” y el avance de una reforma con el propósito de “alcanzar la explotación industrial y agraria con verdadero sentido social”. También demandaron la “incautación de ingenios y de toda fuente de producción o de trabajo que cometa lock-out patronal o niegue los derechos sociales” y reclamaron “el control obrero y cañero en la administración industrial y en la comercialización de azúcares”, entre otros puntos (Nassif, 2016, p. 166).

Asimismo, 1965 fue un año de elecciones sindicales y legislativas que proyectaron el protagonismo del sindicalismo azucarero. En tal sentido, en las elecciones para elegir nuevas autoridades de FOTIA fue consagrado como secretario general Atilio Santillán, del ingenio Bella Vista, quien se convertiría en una figura clave de la defensa obrera de la época. Asimismo, en el plano político a través del partido Acción Provinciana, liderado por Fernando Riera, llegaron a la Legislatura provincial y nacional representantes obreros pertenecientes a la Federación que, como veremos más adelante, impulsaron diversas leyes azucareras. En julio de ese año, a la endémica crisis azucarera se sumó el estancamiento de la discusión paritaria, situación que condujo a FOTIA a declarar la huelga por tiempo indeterminado. En esa ocasión, los diputados Romano y Riera exigieron al presidente Illia una urgente solución al problema azucarero, en tanto la paralización de la actividad generaría “una tremenda inestabilidad social y lo que es peor una angustia en miles de hogares humildes que luchan por un salario mejor que les permita una existencia más digna como argentinos” (Nassif, 2016, p. 166-173).

En octubre de ese año, en un contexto de sobreproducción, la conflictividad obrera se agudizó por la falta de pago de los salarios, situación que motivó la declaración por parte de la CGT y FOTIA de una huelga que se concretó el día 21 de octubre e implicó la movilización obrera a Casa de Gobierno. Uno de los sucesos más trágicos de la endémica crisis expresada en el contexto de esa medida de fuerza aconteció en Bella Vista donde, en un confuso episodio signado por la desesperación obrera por meses de salarios adeudados, fue asesinado el dirigente gremial Camilo González. La responsabilidad recayó sobre un grupo de trabajadores temporarios pero FOTIA a través de un comunicado se encargó de precisar:

“La mano inconsciente de un obrero sin responsabilidad gremial ha abatido la vida de un dirigente, elegido como víctima propiciatoria de una situación que no había creado y por cuya solución venía trabajando con toda energía [...] la responsabilidad del hecho de sangre es de los industriales azucareros y del gobierno nacional, que día a día dilatan las medidas efectivas y concretas que se deben

dictar para obligar a los industriales a cumplir sus obligaciones salariales”.<sup>8</sup>

Como analizó Nassif, los niveles de conflictividad no cesaron. En este sentido, el mes de diciembre estuvo marcado por diversas protestas obreras que comenzaban en los pueblos azucareros y concluían en la ciudad capital, específicamente frente a la Casa de Gobierno, estrategia que conjugaba la intención de otorgar mayor visibilidad a los reclamos y la interpelación a las autoridades políticas, de quienes se esperaba una urgente respuesta. En ese mismo mes, FOTIA consensuó un pliego que reivindicaba un aumento salarial para los obreros de surco, los más postergados y vulnerables actores de la cadena productiva; la redistribución de la tierra de los industriales azucareros y grandes latifundios; y la participación directa de obreros y productores en la industrialización y comercialización del azúcar, entre otros puntos. (Nassif, 2016, p. 178-179)

En el mes de diciembre de 1965, a medida que los industriales empezaron a pagar parte de los salarios adeudados, la articulación entre la actividad sindical y política se expresó en la esfera legislativa y la promoción de leyes azucareras. En tal sentido, a fines de ese mes, la Legislatura provincial promulgó y reglamentó una ley que declaraba de utilidad pública y sujeta a expropiación, incautación de uso o intervención a fábricas azucareras. Por su parte, el Congreso nacional votó una ley que declaraba en estado de emergencia el proceso de producción, industrialización, distribución y comercialización del dulce hasta que fuera sancionada una “ley orgánica del azúcar”. La legislación otorgaba al gobierno nacional la facultad de intervenir los ingenios y procuraba frenar el impacto de la crisis en el mundo laboral al impedir el despido o suspensión de los trabajadores y obligar a reincorporarlos desde 1955. Más allá de la radicalidad de algunas medidas, la legislación no resultó efectiva para estabilizar política y socialmente a la provincia. Al poco tiempo, la inmediata falta de reglamentación de la ley de emergencia económica promovió que la dirigencia de FOTIA envíe al presidente Illia y al gobernador Barbieri una nota solicitándoles sus renuncias, la misma señalaba

“El compromiso de lucha no tiene términos medios: con el pueblo o con los industriales azucareros, con los intereses de la colectividad o en defensa de los privilegios feudales de familias patriarcales y del monopolio imperialista metido ya en la industria azucarera. Quienes quieran quedar bien con Dios y con el diablo, no podrán luego eludir su destino de infierno”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *La Gaceta*, 9 de diciembre de 1965. Citado en Nassif, 2016, p. 177.

<sup>9</sup> *La Gaceta*, 5 de enero de 1966.

Otro de los urgentes problemas que tuvo que enfrentar la dirigencia sindical fue la mecanización de las tareas agrícolas que FOTIA recuperó, en tanto la llegada de la maquinaria y la tecnificación del agro agudizaban los niveles de desocupación. En este contexto, la Federación abogó por su utilización racional, lo que permitiría el desplazamiento de la mano a obra hacia otras tareas, motivo por el cual promovió la elaboración de subproductos derivados de la caña de azúcar como el bagazo, la cachaza, la melaza y el alcohol; así como la reactivación de talleres vinculados a la reparación de la maquinaria fabril (Nassif, 2016, p.189).

A principios de 1966 tuvo lugar un importante Congreso de FOTIA a través del cual el sindicalismo azucarero expresó importantes definiciones socio-económicas. Entre otros postulados propuso la sanción de una ley azucarera orgánica que contemplaba la redistribución de las tierras de los industriales azucareros y de todo latifundio; la formación de unidades agrarias integradas por trabajadores de surco y la organización de cañeros chicos para la explotación racional de la tierra; el control obrero de la contabilidad de los ingenios y la comercialización de la producción; participación obrera en el gobierno empresario; la incautación de ingenios y fundos cañeros en caso de *lock-out* que afecte a los intereses sociales de los trabajadores. También el Congreso discutió un Plan de Lucha en el que demandó al gobierno adoptar una política económica tendiente a crear nuevas fuentes de trabajo capaces de absorber la mano de obra desocupada y la desplazada por la incorporación de maquinaria, especialmente por el ingreso de las cosechadoras. Asimismo, se acordó el bloqueo de toda la producción de los ingenios y de las rutas provinciales (Nassif, 2016, p. 191-194).

Siguiendo el estudio de Nassif, una síntesis de la amplia y conflictiva situación social por la que atravesaba Tucumán antes del golpe de Estado de junio de 1966 se reveló en la cantidad de protestas laborales que tuvieron lugar entre enero y junio de ese año. En tal sentido, fueron declarados dos paros generales, uno provincial y otro nacional y, al menos, se concretaron 19 medidas de fuerza, en su gran mayoría protagonizadas por obreros azucareros, estatales y docentes, tres de las cuales terminaron con una fuerte represión policial. En el caso de los azucareros, las ocupaciones de ingenios, las marchas desde los pueblos a la ciudad y los cortes de ruta se conjugaron con la paralización de actividades. Por ejemplo, en el Mercedes, la generalizada falta de pago de los salarios, empujó a la toma de la fábrica por más de 20 días. La situación lejos de calmarse se agudizó en el mes de abril, cuando el gobierno nacional dispuso la limitación de la zafra por cupos, decisión que agudizó la conflictividad obrera. Frente a esta medida, FOTIA realizó un

plenario en el que rechazó la disposición presidencial y programó movilizaciones como forma de expresar el descontento y exigir el pago los salarios impagos a lo largo de tres meses, a lo que se sumaba la falta de pago del aguinaldo de 1965.

Con el fin de unificar y fortalecer las demandas de los trabajadores, FOTIA convocó a organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas a participar de un Congreso, llevado a cabo en el mes de abril y denominado Pro-Defensa de la Economía de Tucumán. Algunas de las numerosas organizaciones que formaron parte del mismo fueron FEIA (Federación de Empleados de la Industria Azucarera); ATEP (Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales); ATE (Asociación Trabajadores del Estado); FUN (Federación Universitaria del Norte); Liga de Estudiantes Humanistas Tucumán.<sup>10</sup> Este Congreso aprobó un Plan de Lucha que, entre otras medidas, declaró en mayo un paro provincial por 24 horas. En síntesis, este Congreso “constituyó una instancia de organización multisectorial en la que se intentó articular todos los reclamos y encauzar en un frente común las protestas. A la vez que reafirmaba la centralidad de la producción azucarera en la economía de Tucumán” (Nassif, 2016, pp.201-202).

En este contexto de crisis, se empezó a instalar la amenaza de intervención a la provincia, situación que llevó a la FOTIA y a la CGT a subrayar que en Tucumán no existía un problema institucional, sino de índole económico-social. Por tanto, la solución de la coyuntura requería de la promulgación de una ley azucarera orgánica, como la que ya había sido propuesta varias veces por el sindicalismo. Frente a la posible intervención ambas organizaciones se preguntaban si la medida:

“¿vendrá con esa ley azucarera o solamente llegará con instrumentos de represión para impedir que los trabajadores reclamen el pago de sus jornales atrasados [...] o seguirá este

---

<sup>10</sup> El investigador Antonio Ramos Ramírez señala que la adhesión “de los docentes significó el desecho definitivo de la concepción del maestro como un “apóstol laico” de la civilización, para comenzar a identificarse con la categorización de trabajador. En este sentido, las prácticas y las manifestaciones de ATEP comenzaron a sobrepasar el ámbito de los reclamos netamente gremiales y pusieron en conocimiento del resto de actores sociales y políticos de la provincia que a los representantes de la docencia tucumana no sólo les correspondía el papel de intermediario frente a su “patronal pública”, sino que entendían necesaria la defensa de valores que contribuyeran a una mejora integral de las condiciones de vida de los tucumanos” (Ramos Ramírez, 2011, p.5). También remitimos a su estudio de 2012, donde analiza la experiencia sindical docente de ATEP entre 1966 y 1976, etapa en que los docentes transitaban “de una autopercepción ‘clasemediera’, a constatar que se encontraban inmersos en un proceso de proletarianización que se pretendía fuera irreversible, situándolos más cerca de los obreros azucareros que de los profesionales liberales e intelectuales, a los que todavía algunos añorarían pertenecer, como parte de la nostalgia de lo que nunca se tuvo”.

gobierno constitucional sin aquella ley que reclamamos, pero fortificados con la fuerza para construir el paraíso del acatamiento que pretenden los industriales azucareros?”<sup>11</sup>

En el contexto de esta compleja y profunda crisis sobrevino el golpe de Estado del 28 de junio de 1966. Inicialmente, FOTIA no expresó un posicionamiento de explícito repudio al golpe comandado por Juan Carlos Onganía. “En gran medida en ello influían el alto grado de malestar de los obreros azucareros, con al menos tres meses de salarios adeudados [...] y también pesaba la mayoritaria adhesión al peronismo de los afiliados frente a un gobierno radical con el que se sentían escasamente identificados y al que además responsabilizaban por aceptar el exilio de su líder y la proscripción de su partido”. A los pocos días muchos ingenios comenzaron la molienda “sin sospechar siquiera” que, para muchos de ellos, sería una de las últimas cosechas (Nassif, 2106, p.210).

### **3- SEGUNDA ETAPA (1966-1976): Desarticulación del complejo agroindustrial azucarero, éxodo y desempleo**

#### *3.1 Crisis azucarera, intervención estatal e impacto social*

Las esperanzas depositadas por el pueblo tucumano en las nuevas autoridades nacionales, emanadas del golpe de Estado de 1966 comandado por el General Onganía, respondían, sin duda al malestar social resultante de la larga y aguda crisis económica que atravesaba la provincia.

Como señalamos anteriormente, la paulatina eliminación de los instrumentos de regulación estatal de la actividad azucarera (Fondo Regulador y apoyo crediticio) y la tendencia a orientar los recursos del Estado para beneficiar a los ingenios más eficientes que implementaron los gobiernos pos-peronistas entre 1955-1966, generaron un fenómeno de reequipamiento de algunas fábricas y un consecuente cambio cualitativo en la ocupación de personal que derivó en la precarización laboral, el aumento de empleos transitorios y el descenso de los permanentes. Este cuadro, sumado a la excesiva producción de azúcar en 1965 y el inevitable desplome del precio internacional desencadenó en 1966 la crisis azucarera más importante del siglo XX (Paolasso y Osatinsky, 2007, pp. 6-7)

El desolador panorama de la economía provincial fue recogido en un artículo del geógrafo francés Romain Gaignard publicado originalmente en Toulouse en 1964:

---

<sup>11</sup> *La Gaceta*, 23 de junio de 1966- Citado en Nassif, 2016, p. 209.



“La crisis es profunda y toca los fundamentos mismos de la especulación: los cañeros han querido conjugar los beneficios de la combinación de un marco regional de tipo colonial con los de un marco nacional que asegure un mercado bien protegido y en expansión. En la actualidad se ven atrapados en una trampa de su propio dinamismo y una reconversión aparece como necesaria. Exigiría profundas convulsiones. Pero, por ahora, la sociedad y la economía regionales no están sin duda en condiciones de soportarlas” (Gaignard, 201, pp.166-167).<sup>12</sup>

En ese contexto, el golpe de junio 1966, con su orientación decididamente favorable al gran capital, ofreció una oportunidad excepcional a quienes preconizaban que el cierre de un grupo de empresas tucumanas en problemas era la única opción para sanear definitivamente una industria “ineficiente” y “sobredimensionada”. Así, los liberales que asumieron la dirección de los asuntos económicos de la dictadura militar decidieron “ayudar” a las fuerzas del mercado interviniendo siete ingenios para proceder a su cierre definitivo y desmantelamiento. La medida se anunciaba como la primera de un plan coherente de “saneamiento” y “modernización” económica que dejaría la producción azucarera en manos de las empresas y zonas más eficientes, lo que implicaba una amenaza real para otros ingenios. Bajo una fuerte coacción algunos grupos empresarios optaron por el cierre “voluntario” de sus ingenios a cambio de la cancelación de deudas y compensaciones por la cesión de “derechos de molienda” al Estado.

La intervención estatal, lejos de solucionar la crisis, la profundizó y aplicó el más duro golpe que en toda la historia haya recibido la sociedad y el aparato productivo de la provincia: limitó y estableció cupos de producción; prohibió instalar nuevas fábricas o ampliar la capacidad productiva de las existentes; eliminó el crédito estatal para emprendimientos agro-industriales azucareros y decretó la intervención de varios ingenios y la decisión de cerrar y desmantelar a siete de ellos —“por sus altos índices de endeudamiento”— de un total de 27 que estaban en actividad. La medida, presentada como una racional e inevitable “cirugía mayor” para solucionar de una vez y para siempre los graves problemas de la provincia, se complementó con el cierre “negociado” de otras

---

<sup>12</sup> “Una speculation tropicale en crise: Les plantations de canne a sucre de Tucumán (Argentine)”, artículo publicado en *Les Cahiers d’Outre-Mer*, N° 67, 17<sup>e</sup> éme année, Toulouse, juillet-sept. 1964, pp. 245-291, 1964. El texto, traducido por Maurice Jeger, detenido-desaparecido en Tucumán en julio de 1975, fue revisado y corregido en 1995 por Romain Gaignard y Daniel Campi y publicado en 2011 en *Travesía. Revista de Historia económica y social*.

fábricas azucareras, con lo que fueron once las que cerraron sus puertas de manera definitiva.<sup>13</sup>

El programa de diversificación agraria y radicación de nuevas industrias que se impulsó en esos años bajo el nombre de "Operación Tucumán", con la concesión de grandes ventajas impositivas, demostró poseer un alto grado de improvisación y sus resultados fueron pobres. En los primeros años de su aplicación no se radicó ninguna empresa de envergadura, con lo que la mano empleada por las pequeñas fábricas instaladas apenas sobrepasaron las 3.000 personas. Además, las nuevas industrias carecían del poder económico multiplicador que caracterizaba a los ingenios azucareros. Recién en las postrimerías de la dictadura se concretarían radicaciones de importancia, como fueron las plantas de Grafanor, Alpargatas, Bosch y –sobre todo– Saab-Scannia.<sup>14</sup>

En este sentido, historiadores especialistas en esta etapa de la historia de la provincia no dudan en afirmar que la falacia de los discursos de la dictadura de la “Revolución Argentina” de “diversificación agraria”; “mantenimiento de fuentes de trabajo” y “futura expansión industrial” fueron sólo promesas de un gobierno que operó sobre una crisis económica, política y social previa, pero lejos de solucionarla en beneficio de los sectores populares, profundizó el camino de concentración monopolista de la industria azucarera (Nassif, 2016, p. 601)

Las derivaciones del plan “modernizador” de la dictadura no fueron inocuas. Por el contrario, significó la destrucción de más del 30% del parque industrial azucarero (descendieron abruptamente la superficie sembrada de caña, el precio del azúcar, el número de explotaciones cañeras y, en consecuencia, la producción). El efecto se trasladó directa e inmediatamente sobre los trabajadores, cañeros, comerciantes, proveedores y poblaciones enteras que tenían su razón de ser en función del cultivo y el procesamiento industrial de la caña de azúcar. Descendió el número de trabajadores vinculados a la agroindustria, así como los salarios de obreros en actividad y aumentaron las tasas de desocupación. (Ver Tabla Nº 14 en Anexo)

---

<sup>13</sup> Intervinieron los ingenios Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana; se cerraron en 1967 el San José, Los Ralos, Amalia, Santa Lucía, Mercedes y San Ramón; se declara en quiebra el ingenio San Antonio (Paolasso y Ostainsky, 2007: 7)

<sup>14</sup> En 1973 un informe oficial del gobierno de la provincia indicaba que se habían radicado industrias textiles (Textil Lules, Algodonera San Nicolás, Tecotex S.A, Grafanor S.A); de calzados (Alpargatas S.A; Panam S.A); de Pilas secas y grabadores (Hitachi); equipos de radiocomunicación (Sistemas de Comunicaciones S.A); de harina (Deshidratadora Tucumana S.A), de jugos cítricos y aceites (San Miguel S.A, Vicente Trapani y Citromax); de fósforos de madera (Compañía tucumana de fósforos); talleres metalúrgicos (Rusco Hnos.); de espuma de poliuretano (Suavegom S.A); de acondicionadores de aire (Boris Garfunkel e hijos).

La eliminación de los puestos de trabajo no sólo se registró en los ingenios cerrados, sino también en los que siguieron en actividad. Durante los primeros dos años de aplicación del “Plan” la mano de obra ocupada en fábricas de azúcar disminuyó en un 25% mientras la producción se incrementó un 2%, lo que permite inferir que la modernización fue llevada adelante sobre la desocupación. De allí que una de las primeras reacciones de los obreros despedidos haya sido la quema de máquinas cosechadoras (Nassif, 2016, p. 602). En realidad, tras los episodios de destrucción de maquinaria se encontraba la crítica a tres fenómenos íntimamente relacionados: mecanización, desocupación y pauperización; es decir, la detracción no radicaba tanto en la tecnificación misma –que inclusive podría facilitar la vida del obrero– sino a quienes se beneficiaba con su implementación. En definitiva, la cuestión giraba en torno a la distribución inequitativa de las ganancias que generaba la modernización tecnológica (Jemio, 2012)

Otro de los efectos más relevantes de la nueva política económica fue la profundización del deterioro de las condiciones de trabajo en las que ya se encontraban la mayor parte de los obreros azucareros. En palabras de un observador del proceso:

“Los salarios son muy bajos, sobre todo si se tiene en cuenta el carácter temporal del empleo, lo duro de la tarea y las condiciones lamentables de vida impuestas a la mano de obra migratoria. En todo conflicto social el primero en ceder es el bracero, pues, venido especialmente para la cosecha, no tiene más que sus manos y la caña para subsistir (...) 80.000 hombres más o menos, es decir, 80.000 personas y sus familias viven directamente de la zafra (...) A esta gente que está amontonada en galpones o bajo carpas en el campo, la ley le otorga casa y agua potable. Solamente los ingenios disponen de viviendas para obreros temporarios, cerca de las fábricas, no en las plantaciones”. (Gaignard, 2011:185)

Como adelantáramos, los intentos de reconversión productiva basados en el estímulo de otras manufacturas radicando nuevas industrias no resultaron exitosas a la hora de absorber el contingente de desocupados que dejaba el cierre de las fábricas de azúcar. El resultado fue la emigración y con ella el retroceso demográfico. Entre 1960 y 1970 alrededor de 160.000 tucumanos abandonaron la provincia en busca de trabajo (Ver Tabla N° 15 en Anexo).

La desocupación, la emigración forzada y pueblos que comenzaron un lento e inexorable languidecer fueron las primeras manifestaciones del legado del llamado “Plan Salimei”.<sup>15</sup> El parque azucarero de Tucumán quedó reducido a 16 ingenios de los 27 que habían participado en la zafra de 1965. Los 9.327

---

<sup>15</sup> Jorge Salimei fue Ministro de Economía y de Trabajo durante la presidencia de Juan Carlos Onganía

puestos de trabajo perdidos con el cierre de las once fábricas no dan una cabal idea del tremendo impacto social del fenómeno. El retroceso demográfico que sufrió la provincia quizás sea más elocuente al respecto: contaba en 1965 con 930.000 habitantes y descendió a 766.000 en 1970. De allí que algunos autores hablen de “catástrofe demográfica y social o de sangría demográfica en tanto se registró el éxodo de alrededor de un tercio de la población” (Pucci, 2007, p. 28).

Se pueden citar como claros ejemplos de este fenómeno los paradigmáticos casos de los ingenios Mercedes, Los Ralos y Santa Lucía. En el primer caso, prácticamente “huyeron” todos los jóvenes quedando unos pocos viejos, niños y mujeres, quienes subsistieron empleándose como trabajadoras domésticas en casas de familia de la capital. En Los Ralos sucedió algo similar, algunos recuerdos de quienes vivieron el cierre de los ingenios refieren un marcado descenso demográfico que sumió al interior tucumano en un cuadro de desolación plasmado en la imagen de “unos cuantos changos que quedaron deambulando” (Pucci, 2007, p.131). El cierre del ingenio Santa Lucía no sólo “vació” al pueblo de gente sino también de saberes y experiencia, ya que se llevó a los más capaces, los técnicos, a los que tenían estudios u oficios, quienes fueron los primeros en marcharse. Lucía Mercado –que transitó su niñez y adolescencia en el ingenio y escribió tres libros sobre la historia de Santa Lucía a través sus vivencias subjetivas– describe los derroteros del éxodo en pocas líneas:

“Años 1966, 1967 y 1968. Familias enteras disgregadas, fueron tiempos de disociaciones y separaciones en toda la geografía del país; hombres que se iban al sur, a la Patagonia; mujeres de domésticas a las grandes urbes; los más arrastrarían a toda su prole a ciudades como Córdoba o engrosarían el cordón del Gran Buenos Aires; formando o agrandando los lugares de viviendas precarias, conglomerados llamados por los demás “Villas Miserias”, para muchos de nosotros fueron “Villas de emergencia” (Mercado, 1999, p. 211)

Efectivamente, la abrumadora mayoría de los migrantes tucumanos habría de radicarse en las “villas miseria” de la ciudad de Buenos. Pero tal retroceso demográfico, pese a su espectacularidad, no da cuenta de la magnitud del drama. Deben contarse también por miles las familias tucumanas que engrosaron la periferia de la capital provincial en improvisados y paupérrimos asentamientos.

De este modo, el éxodo adoptó diferentes modalidades y tomó distintas direcciones. El primer impulso migratorio llevó al traslado de los trabajadores de ingenios cerrados hacia los que se mantenían en actividad, otros siguieron hasta la capital provincial en busca de inserción en el mercado laboral urbano;

el grueso de la población desocupada, empero, se dirigió a la Capital Federal en procura de mejores condiciones de trabajo y ventajas salariales. En suma, la clausura de los ingenios no fue un mero cierre fabril, sino la muerte de pueblos enteros (Pucci, 2002, p. 133)

“Enmudecieron las sirenas, se inmovilizaron las máquinas, se acallaron las centrífugas, las calderas, las roldanas, los canchones. Se murieron los vapores y al igual que un muerto, el ingenio quedó frío. Se cerraron las puertas y nosotros (‘la gente’) no entramos más. Nos inmovilizamos también” (Mercado, 1999, p. 209)

Una vía alternativa de subsistencia excepcional ante la pérdida de las fuentes de trabajo fue la conformación de cooperativas. Una experiencia modelo de este tipo de organización laboral fue la de Trabajadores Unidos de Trabajo Agropecuario Ltda. (CTU) en Campo de Herrera.<sup>16</sup> En febrero de 1967 la Compañía Azucarera Bella Vista S.A. preavisó a 350 obreros permanentes que sus funciones finalizarían en mayo y ofreció desprenderse de 2.000 hectáreas de tierra de su propiedad para entregarlas a los obreros cesantes. La recomendación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de que la propiedad fuera explotada en una sola unidad, sin parcelar, bajo un sistema cooperativo integral, posibilitó que peladores de caña de azúcar, se constituyeran en dueños de las tierras que explotaban como una unidad agrícola cooperativa. La sustentabilidad de la organización se consiguió gracias a la asignación del cupo para la producción cañera y se fortaleció, así, el desarrollo financiero. A partir de entonces, se realizaron numerosas acciones de capacitación técnica y organizativa.<sup>17</sup>

En un primer momento, la iniciativa fue acogida favorablemente por el gobierno; pero, al poco tiempo, fue sospechada o mirada como una organización potencialmente peligrosa, principalmente en el contexto de un gobierno dictatorial. Esto trajo aparejado un abandono del apoyo por parte del Estado, manifiesto también en la remoción de los técnicos del INTA que le dieron origen y en el silencio social como estrategia para sobrevivir y defenderse de las amenazas externas hacia el modelo organizacional. (Reyes, Rodríguez y Quintana, *Informe*, s/f)

---

<sup>16</sup> Campo de Herrera está ubicado en el departamento Famaillá, a 35 km de San Miguel de Tucumán. Persiste hasta la actualidad gracias a su única fuente económica y productiva (la CTU), cuyas principales actividades son el cultivo de caña de azúcar y citrus, y la producción de ladrillos cerámicos.

<sup>17</sup> Una de las realizaciones del Consejo de Administración de la Cooperativa más recordada y valorada por toda la comunidad fue la organización de la Sección de consumo, que incluía: huerta comunitaria, proveeduría para el aprovisionamiento y venta de artículos comestibles, indumentaria, etc.

### *3.2 Movilizaciones, huelgas y protestas. El papel de la FOTIA*

El incremento de la desocupación y la precarización de las condiciones de trabajo de quienes permanecieron ocupados activaron el estado de movilización de los trabajadores y de la sociedad civil toda. El ya citado Romain Gaignard hace referencia a un “clima social explosivo que reina en las tierras azucareras” y a un “ambiente de subhumanidad que golpea al visitante” (Gaignard, 2011, p. 191). En ese contexto diversos segmentos sociales radicalizaron posiciones y se unificaron contra un enemigo común a sectores que hasta entonces no conectaban sus reclamos, como el movimiento estudiantil universitario y los sindicatos obreros, mayoritariamente de raigambre peronista. Entre las acciones y modalidades empleadas se destacaron las ollas populares en ingenios cerrados o por cerrarse (algunas de ellas pasarían luego a constituirse en comedores obreros); los paros (un total de 14); bloqueos de fábricas y manifestaciones. En general, las medidas de fuerza se realizaron en oposición a las disposiciones azucareras tomadas por el gobierno de facto y en contra de las empresas. Muchas de las iniciativas finalizaron en intensos enfrentamientos con la policía y obreros detenidos, torturados y heridos (Nassif, 2016, p. 344)

Según Roberto Pucci desde fines de los años '50 FOTIA aglutinaba a un “fuerte proletariado levantisco, altamente organizado y en permanente movilización”; sin embargo, en un primer momento adhirió al golpe militar. Durante 1966 la Federación registró una “alarmante pasividad” ante la “cirugía modernizadora” puesta en marcha por el Plan Salimei. Asimismo, los gremios de los ingenios “salvados” miraban para otro lado. Las promesas de expandir industrialmente la provincia, de mantener las fuentes de trabajo y garantizar el cobro de salarios por un año al personal afectado por los cierres explicarían la inacción inicial del sindicato más fuerte de la provincia. Pero en tanto fue avanzando el plan de racionalización la “tregua” se fue acortando y comenzaron las primeras manifestaciones de protestas por los cierres. En octubre de 1966 se realizaron los primeros paros azucareros –con alto acatamiento y fuerte apoyo del movimiento estudiantil universitario– que se adelantaron al primer paro nacional convocado por la CGT el 14 de diciembre del mismo año. (Pucci, 2007, p.105).

Fueron, fundamentalmente, los sindicatos de las fábricas cerradas (“ex-ingenios”, “ex-sindicatos”, “ex-obreros”) quienes iniciaron los movimientos de oposición y resistencia, con una marcha de trabajadores cesanteados del ingenio Los Ralos y la organización de la primera olla popular en noviembre de 1966 (Pucci, 2007, p. 114). En enero de 1967, motorizados por la desocupación y el hambre, los obreros de las fábricas cerradas se disponían a

marchar desde Bella Vista hacia la capital de la provincia cuando la represión policial quitó la vida a la esposa de un trabajador cesanteado del ingenio Santa Lucía. La muerte de Hilda Guerrero de Molina (una de las organizadoras de las ollas populares) se produjo cuando la policía tomó por asalto el sindicato del Ingenio Bella Vista y lanzó gases lacrimógenos. Hilda salió por la ventana y en la calle cayó herida mortalmente con un orificio de bala en la frente. La movilización popular que produjo el velatorio en su casa de Santa Lucía y la manifestación luego de la misa en su memoria en la Iglesia La Merced, también fueron reprimidas por la autoridad. De este modo, el estallido social que provocó la muerte de Hilda puede entenderse como una de las primeras rebeliones obreras y populares a la dictadura de Onganía. Para algunos autores, el trágico episodio constituyó un punto de inflexión en el que la lucha obrera por reivindicaciones económicas y en defensa de las fuentes de trabajo, se transformó en una lucha en contra de la política represiva y antipopular del gobierno, elevándose a una lucha masiva y antidictatorial (Nassif, 2016, pp. 605-606).

A partir de 1967 se observa un cambio de actitud de la FOTIA que, a contracorriente de la CGT nacional que aún fomentaba las expectativas en la dictadura, apoyó los movimientos de protesta y las movilizaciones de los obreros azucareros. La Federación fue entonces sancionada quitándole la personería jurídica y los fondos. La creación de una Federación paralela promovida por el gobierno y la patronal, denominada Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT), constituyó, asimismo, otra estocada para debilitar a la organización sindical que aglutinaba a los obreros azucareros en tanto generó la primera escisión significativa tras su fundación en 1944. El Consejo Directivo dirigido por Atilio Santillán dimitió en 1968 y fue reemplazado por Miguel Lazarte, quien mantuvo la línea de lucha de su predecesor. Fue en mayo de 1969 cuando esa continuidad se interrumpió tras el “recambio colaboracionista” que significó Ángel Basualdo quien resignó la lucha por la reapertura de los ingenios azucareros (Nassif, 2016, p. 606).

En contraste con este debilitamiento de la FOTIA se abrió una Comisión de Ingenios cerrados y se crearon Comités Pro Defensa en los pueblos azucareros, de composición “policlasista” pero con un marcado protagonismo obrero. Estos movimientos, empero, no compitieron con la FOTIA, sino que esta última apoyó sus reclamos y protestas. Los episodios de lucha de los obreros azucareros registrados entre el paro nacional convocado por la CGT en diciembre de 1966 y enero de 1969 fueron 37 en total. De ellos, 19 fueron realizados por obreros de ingenios que estaban cerrados o que posteriormente cerrarían; diez por obreros de ingenios en funcionamiento; dos por los empleados administrativos de FOTIA y ocho efectuados en conjunto. De estos

datos se puede inferir que aunque la mayoría de los conflictos fueron protagonizados por obreros que habían perdido sus empleos, ello no significó que el sector de obreros ocupados quedase reducido a la pasividad (en general protagonizó hechos de lucha relacionados con despidos y cesantías, cambios en las modalidades de trabajo, etc.). En este período todavía los obreros ocupados confluyeron con los que habían perdido sus puestos en ocho oportunidades (Nassif, 2016, p. 343).

En este sentido, la defensa del ingenio Bella Vista constituyó un caso testigo por el carácter agudo que adquirió allí el avasallamiento del régimen sobre los trabajadores y también por la defensa acérrima de las fuentes de trabajo por parte de los obreros y el pueblo del lugar. La resistencia de estos últimos impidió que la fábrica fuera clausurada por la dictadura. En efecto, hacia 1969, la planta fabril continuaba en actividad pero con una producción muy por debajo de su capacidad y la amenaza de cierre era constante, razón por la cual la movilización obrera y popular de la localidad proseguía. En noviembre de 1968 se creó la Comisión Pro-Defensa que mantuvo la lucha para preservar el ingenio hasta que en abril de 1969 se logró la conformación de una Cooperativa de Producción, arrendada por la DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado) lográndose que el ingenio siguiera moliendo. (Nassif, 2016, p. 414)

En 1969 los enfrentamientos en Villa Quinteros constituyeron un salto cualitativo en el recorrido de las luchas obreras. El cierre del ingenio San Ramón en agosto de 1967 había arrojado a cientos de familias de obreros y empleados al desempleo y a la miseria, amenazando la vida misma de la localidad. Desde ese momento, los obreros comenzaron con medidas de fuerza en defensa de la fuente de trabajo y en contra del desmantelamiento de la fábrica. Enterados de que el interventor de la provincia (Roberto Avellaneda) pasaría por las cercanías del ingenio, ex obreros del ingenio se apostaron a la vera de la ruta 38 para acercarle sus reclamos, ocasión en la que fueron abruptamente reprimidos por la policía provincial y federal. Luego de varias horas de enfrentamientos, las fuerzas represivas rodearon el pueblo y unas horas más tarde, tras la llegada del Juez de Paz, el enfrentamiento cesó. El saldo fue de 21 a 40 pobladores heridos y once policías con lesiones (Nassif, 2016, p. 430).

En este turbulento escenario, La Comisión Inter-Sindical de ingenios cerrados planificó nuevamente una marcha hacia la capital de la provincia con el propósito de exigir soluciones definitivas para los trabajadores desocupados. Así, la confrontación de los pobladores con las fuerzas represivas que adquirió un verdadero carácter de “pueblada”, repercutió más allá de la Villa y sus efectos llegaron hasta San Miguel de Tucumán. Si bien las movilizaciones y protestas continuaron en los ingenios cerrados por la dictadura, la sangría



demográfica había debilitado el número y el grado de concentración de la clase obrera. Asimismo la FOTIA (bajo la dirección de Basualdo) se mostraba más dispuesta a negociar y conciliar con los funcionarios del gobierno que a mantener el estado de lucha y movilización, lo que habría impulsado el traslado del centro neurálgico de movilización a la ciudad capital.

Aunque los estudiantes tucumanos también se sumaron a la revuelta cordobesa de mayo y junio de 1969, las grandes puebladas tucumanas (“Tucumanazos”) tuvieron lugar en noviembre de 1970 y junio de 1972. En noviembre de 1970, días antes de la huelga convocada por la CGT y en pleno despliegue de la protesta y lucha obrera en la provincia, la conflictividad social alcanzó una agudeza particular y adoptó un escenario diferente: la capital de la provincia. La confluencia de la protesta obrera y del reclamo estudiantil por el comedor universitario llevó a los manifestantes a asediar la Casa de Gobierno en busca de respuestas. Dos años más tarde, en junio de 1972 la confrontación popular con las fuerzas represivas alcanzó altos niveles de violencia. Como lo señaló Nassif, el movimiento que conjugaba reivindicaciones sectoriales con reclamos antiimperialistas y de restauración democrática, no estalló en el corazón de la ciudad sino en espacios universitarios ubicados en el sudoeste de la capital (“La Quinta Agronómica”) lo que le valió el nombre de “Quintazo”. Si bien la clase obrera industrial tuvo escaso protagonismo en este movimiento, otros sectores asalariados, así como las agrupaciones estudiantiles universitarias y los vecinos de la zona, lideraron el movimiento de protesta que excedió a la demanda sectorial para convertirse en una movilización de la sociedad civil en contra de la dictadura y de su política económica en general. (Nassif, 2016)

Así, los “tucumanazos”, en los que universitarios, estudiantes secundarios, obreros, empleados, pequeños comerciantes, etc., sembraron de barricadas la ciudad capital, rebasaron a la policía, ocuparon unas 60 manzanas y obligaron al régimen a hacer intervenir en la represión a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional y al mismo ejército.

Entre ambos estallidos los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo fueron escenario de intensas manifestaciones obreras. El conflicto, también analizado por Nassif, se originó en 1971 cuando la patronal ferroviaria cesanteó a 15 trabajadores. La situación de los talleres era similar a la vivida por los ingenios, ya en 1961 se estimaba que habían emigrado alrededor de mil obreros, había escasez de materia prima y faltaban insumos. En octubre los obreros ocuparon las instalaciones en solidaridad con los cesanteados y consiguieron (gracias al apoyo de una Coordinadora de Sindicatos y Organizaciones Combativas de Tucumán) que se reintegrara a nueve de los quince, además del compromiso de la empresa de revisar otros 6 casos. En diciembre del mismo año, el dirigente ferroviario y miembro del Partido Comunista Revolucionario, Ángel

Manfredi, fue detenido por fuerzas represivas y víctima de una larga persecución hasta que en 1976 fue secuestrado y desaparecido. (Nassif, 2016)

El 26 de julio de 1972, a sólo un mes del “Quintazo”, los trabajadores azucareros realizaron el primer paro de 24 horas acordado en un congreso nacional de obreros azucareros reunido previamente en Jujuy. Participaron más de 100.000 obreros de todo el país. En Tucumán, se plegaron todos los ingenios excepto el Ñuñorco –que desde hacía varios años permanecía alejado de la FOTIA– y el Marapa. Tampoco participaron los gremios adheridos a FOSIAAT. En algunos ingenios realizaron fogatas y barricadas y se registraron enfrentamientos con las fuerzas represivas. Ante la falta de respuestas realizaron un nuevo paro por 48 horas con cortes de ruta. El Secretario general de FOTIA, Ángel Basualdo, firmó un Acta con el Ministerio de Trabajo levantando el paro de 72 horas que se había programado para el 5 de agosto, sin embargo, algunos ingenios mantuvieron la medida desconociendo la firma del acuerdo. Finalmente, los azucareros consiguieron un aumento salarial del 30%. (Nassif, 2016).

El retorno del peronismo al gobierno en mayo de 1973 no aquietó las aguas. Nuevas tendencias y contradicciones políticas condicionaron el intenso proceso de luchas sociales. Aunque la conflictividad intestina entre las facciones peronistas no depararon hechos de tanta magnitud y violencia como lo hicieron, por ejemplo, en Buenos Aires y Córdoba, en Tucumán tampoco cedieron las tensiones sociales a las que el recientemente elegido gobernador por el peronismo, Amado Juri, no pudo hacer frente con éxito. En ese mismo año, luego de cinco años de haber actuado en Bella Vista, Atilio Santillán regresó a la conducción de la secretaría general de FOTIA y con él se abrió el proceso de democratización de los gremios y de oposición a los jerarcas sindicales. Pese a que la evolución del mercado azucarero se había tornado favorable para la economía provincial, que conoció ese año una zafra record, la puja distributiva se manifestó en una gran huelga liderada por la FOTIA en 1974. El 9 de septiembre, luego de una consulta a las bases a través de delegados seccionales, se iniciaron paros progresivos que culminaron en la huelga general que duró más de dos semanas en pleno período de zafra. Los obreros azucareros exigían, además de aumentos salariales, la anulación de las leyes azucareras de la “Revolución Argentina”, la expropiación sin indemnización de los ingenios, la creación de nuevas fábricas azucareras que absorbieran la capacidad de producción de materia prima y la reapertura del ingenio Esperanza, entre otros reclamos (Nassif, 2016, p. 586). A nivel nacional distintos sindicatos decidieron encontrarse en Tucumán para realizar un “Plenario Sindical Combativo”. En un tenso clima de persecución a los obreros y delegados, la huelga finalizó abruptamente cuando la FOTIA fue intervenida por el Ministerio de Trabajo y su sede ocupada y desalojada violentamente por

la policía local. El poder combativo de la Federación de obreros azucareros se mantuvo a pesar de los hechos del año anterior.

Durante el “Operativo Independencia”,<sup>18</sup> conducido hasta 1979 por los generales Acdel Edgardo Vilas, Antonio Domingo Bussi y Luis Santiago Martela, la represión se intensificó particularmente sobre la clase trabajadora. De las 269 víctimas judicializadas en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el “Operativo”, alrededor del “42% fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, el 15% fueron dirigentes sindicales y gremiales, el 8% eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8% eran empleados públicos, el 5% eran profesionales independientes, el 4% eran estudiantes universitarios, el 2% eran militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7% acreditaba alguna vinculación con el ERP/PRT o con Montoneros”. En palabras de Vilas, el foco del accionar se dirigió al “ámbito gremial y dentro del mismo el objetivo principal era la Fotia”, contexto en el que las fuerzas represivas realizaron, entre otras acciones, la denominada Operación Zafra Feliz que consistía en operaciones de seguridad como “el control y censo de la población que desde otros lugares llegaba para la zafra”, la instalación de los primeros Centros Clandestinos de detención como la conocida “Escuelita” de Famaillá.<sup>19</sup>

En síntesis, el recorrido realizado por la historia de las movilizaciones obreras durante los años sesenta y principios de los setenta en la provincia, pone de manifiesto que la lucha sindical no cesó a pesar de los golpes recibidos durante el gobierno de la “Revolución Argentina”. La clase obrera tucumana protagonizó una de las experiencias de oposición más tempranas a la dictadura, al enfrentar el cierre de los ingenios con acciones de defensa como la ocupación de las fábricas, las ollas populares, los paros azucareros, las marchas y el desafío a las fuerzas represivas militares y policiales. El protagonismo de la clase obrera y su confluencia con otros sectores populares combinó en Tucumán las luchas iniciales de los trabajadores azucareros por la reapertura de los ingenios, con el movimiento social más amplio de oposición a la dictadura que eclosionó, especialmente, en la ciudad capital y que aglutinó tanto a contingentes obreros –inclusive los ferroviarios de Tafí Viejo– con

---

<sup>18</sup> En febrero de 1975 la presidente María Estela Martínez de Perón y sus ministros firmaron un decreto que autorizaba a ejecutar operaciones militares para neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos en la provincia de Tucumán. “Por otro lado, hacía ya meses que se estaban registrando atentados contra militantes gremiales y estudiantiles en la provincia con la llegada de miembros de la Triple A, a mediados del año de 1974. El terrorismo de Estado estaba comenzando su consolidación, y Tucumán, por su alto grado de conflictividad social, y contando como coartada perfecta con la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo en sus montes, fue la elegida como campo de operaciones y laboratorio de experimentación del período represivo que se institucionalizaría a partir del 24 de marzo de 1976” (Ramos Ramírez, p. 8)

<sup>19</sup> *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*. tomo I, p. 33.

trabajadores asalariados estatales y el movimiento estudiantil universitario. Aunque la resistencia del pueblo tucumano –organizado en “comisiones de defensa” a lo largo y ancho de la provincia– no pudo, en un contexto de retroceso y con sólo sus fuerzas, torcer el brazo a la dictadura recién instalada en el poder, obtuvo algunas conquistas nada despreciables como salvar del cierre a cinco ingenios, con los que la dictadura militar creó la empresa estatal CONASA.

Inclusive el día mismo del nuevo golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976, la FOTIA se encontraba realizando un paro de 36 horas en repudio del asesinato del secretario general de la Federación, Atilio Santillán, ocurrido dos días antes. Antonio D. Bussi, utilizando las fuerzas represivas, suspendió y prohibió el paro e intervino la Federación de los trabajadores azucareros. Todos los secretarios generales de los sindicatos fueron dejados cesantes en sus funciones. Una nueva etapa se abría en la historia de los trabajadores tucumanos.

#### **4- TERCERA ETAPA (1976-1983) La dictadura militar y la represión de la clase trabajadora**

La historia de la clase trabajadora en Tucumán durante la última dictadura constituye un desafío difícil de superar: las políticas económicas y laborales y su gravitación sobre el mundo obrero; la represión sistemática que se abatió sobre los trabajadores (especialmente los delegados, dirigentes y miembros de comisiones internas de fábrica); la transformación de la cotidianeidad laboral en las fábricas y talleres; la intervención de los sindicatos y paralización de la vida gremial; y la colaboración de los empresarios en la represión de los trabajadores son algunos de los problemas que esperan ser recuperados con el propósito de conocer y comprender una etapa clave de historia de los trabajadores tucumanos. En este contexto, signado por el vacío historiográfico y la dificultad e inexistencia de fuentes, una mirada del contexto nacional permitirá dar cuenta, en parte, de los parámetros de represión, persecución y lucha entre los que se movieron las clases trabajadoras argentinas y, por ende, también las tucumanas.

##### *Los cambios en la política económica y la legislación laboral*

El período que se abre a mediados de los años '70 y se extiende hasta, por lo menos, la crisis institucional, social y política de 2001, marca un cambio en el patrón de acumulación que había estado vigente en las cuatro décadas previas: la industrialización por sustitución de importaciones. La Reforma Financiera de 1977 promovida por el Ministro de Economía José Martínez de Hoz –junto con la arancelaria y el endeudamiento externo– promovió una

desindustrialización en términos agregados (es decir que hubo un descenso en la participación del sector industrial en el PBI) que, además, tuvo un impacto heterogéneo sobre las distintas ramas, y provocó un proceso de concentración económica. En este contexto, se produjo un incremento exponencial del endeudamiento externo, el cual estuvo vinculado en forma creciente al proceso de valorización financiera (Basualdo, 2010).

Este cambio del patrón de acumulación de capital constituye el contexto imprescindible para analizar las transformaciones experimentadas por los trabajadores y sus organizaciones durante la dictadura militar.

Los recortes en las libertades individuales y colectivas se plasmaron también en la política salarial. En un contexto fuertemente inflacionario, se abandonó la libre concertación de los salarios entre empresarios y trabajadores. La fijación de los sueldos por parte del Estado estuvo, de este modo, estrechamente ligada al cercenamiento de derechos básicos como las convenciones colectivas de trabajo, el derecho a la negociación y a la protesta por parte del movimiento obrero. Tras la regulación oficial de los salarios, éstos sufrieron una caída de alrededor el 40% respecto a los vigentes en 1974, en un contexto de suba del desempleo, supresión de horas extras y recortes en las prestaciones sociales (Basualdo, 2010).

Sin embargo, el gobierno autorizó un marco de flexibilidad a las empresas respecto a los salarios fijados oficialmente por lo que, como producto de luchas obreras o por la situación particular de algunas firmas, en muchas industrias los trabajadores recibieron salarios superiores a los autorizados. Al mismo tiempo, la abrupta caída del salario real, aunque afectó al conjunto de los trabajadores, lo hizo de diferentes maneras en cada caso. Los trabajadores del sector público se vieron perjudicados frente a los del sector privado, y existieron fuertes diferencias salariales entre las industrias localizadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y el interior; entre los trabajadores de plantas grandes, medianas y pequeñas; de acuerdo a la rama de industria; y dentro de una misma rama industrial entre las diferentes categorías profesionales.

Las brechas salariales entre las distintas capas de trabajadores y de acuerdo a divisiones regionales tendieron a producir un efecto de fragmentación y diferenciación. Esta erosión de la relativa homogeneidad del movimiento obrero produjo una fractura en uno de los puntos fundamentales de la solidaridad de los trabajadores: la lucha unificada por el salario, que había sido durante décadas la base del poder de negociación de los sindicatos centralizados (Basualdo, 2010).

Otra modalidad de presión e intervención en el mundo sindical fue el uso de la vía legislativa. Una serie de normas establecieron el congelamiento de la

actividad gremial.<sup>20</sup> Asimismo, se reimplantó la Ley de Residencia,<sup>21</sup> en virtud de la cual todo extranjero sospechoso de atentar contra la “seguridad nacional” podía ser deportado y se estableció la ley de “Seguridad industrial”, que prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano o baja de la producción, entre otras. En suma, la legislación laboral de la dictadura se orientó, claramente, a reprimir las actividades y estrategias de resistencia o protesta de los trabajadores argentinos. A estas formas de represión el gobierno de facto sumó la intervención de la mayoría de los grandes sindicatos y federaciones. El primer objetivo fue, obviamente, la Confederación General del Trabajo (CGT); posteriormente se intervinieron las principales organizaciones obreras, como FOTIA, y se les retiró la personería jurídica a otras tantas.

#### *Las políticas represivas sobre la clase trabajadora*

La clase trabajadora se vio afectada en este período por políticas represivas, laborales y económicas. La represión –que se había iniciado ya un año antes del golpe– se acentuó de forma notable a partir del 24 de marzo de 1976. Las formas más frecuentes eran los asesinatos aislados, aunque reiterados, por parte de fuerzas paramilitares, y la detención de obreros y dirigentes. Según Francisco Delich, este nuevo esquema represivo impactó de esta forma:

“Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos, exiliados. Las cifras, aunque imprecisas, tienen contornos siniestros y horrorosos; se cuentan no por individuos sino por centenares, por miles. Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se prohibieron asambleas y reuniones. (...) La estabilidad en las fábricas dependía ahora no solamente de la eficiencia, de la clasificación o de la disciplina sino de la adaptación ideológica”. (Delich, 1982, p.140. Citado por Basualdo, 2010)

En el caso tucumano, la represión ya estaba instalada cuando sobrevino el golpe de Estado de marzo de 1976. En tal sentido, la dictadura prolongó el poder represivo sobre la clase trabajadora que, desde hacía más de una década, resistía las políticas desmantelamiento del aparato productivo y sus

---

<sup>20</sup> La Ley 21.261 del 24 de marzo de 1976 suspendió el derecho de huelga; la Ley 21.356 de julio de 1976 prohibió la actividad gremial (es decir asambleas, reuniones, congresos y elecciones) y facultó al Ministerio de Trabajo a intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles; la Ley 21.263 del 24 de marzo de 1976 eliminó el fuero sindical.

<sup>21</sup> La Ley 21.259 del 24 de marzo de 1976.

profundas consecuencias sociales. En la provincia, entre 1975 y 1977, se concentró la mayor cantidad de secuestros, principalmente sobre los sectores asalariados, magnitud que comenzó a descender desde mediados de 1977. En tal sentido, entre 1975 –durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón– y los primeros años de la dictadura, la persecución y el secuestro de personas recayeron principalmente sobre los trabajadores. “Según los testimonios, la mayor cantidad de secuestros se llevó a cabo desde enero de 1976 a abril de 1977. En este período, los secuestros realizados sobre sectores asalariados representan el 70%. En números absolutos: de los 98 secuestros denunciados en ese período, 69 provienen de sectores asalariados” (Artese y Roffinelli, pp.322-323).

La contundencia de esta información todavía no tiene correlato en términos de sistemáticas investigaciones sobre la historia de la clase trabajadora durante la última dictadura militar. Frente a este vacío historiográfico el informe de *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad*, especialmente, la sección dedicada a los ingenios Concepción y La Fronterita arroja luz sobre la represión que se abatió sobre los trabajadores durante la dictadura. En el caso de la primera fábrica, al igual que lo sucedido en el resto de los ingenios, el cuerpo de delegados y de la comisión directiva del sindicato pero también muchos obreros de base sufrieron el hostigamiento de las fuerzas represivas. Así, en el Concepción se registran al menos 26 víctimas obreras. “De ese total, veintiuna fueron detenidas-desaparecidas, mientras que cinco fueron liberadas. En esta fábrica las fechas del “ciclo represivo van desde el 7 de enero de 1976 cuando fue secuestrado el secretario general del Ingenio Concepción, César Bustos, y la última con el secuestro de Ceferino López, el 10 de marzo de 1978”.<sup>22</sup> El secuestro de Bustos se produjo antes del golpe de Estado, una semana después fue desaparecido Miguel Ángel Gómez, exintegrante de una comisión provisoria del sindicato; el 22 de enero de ese mismo año el secuestro y la desaparición recayó sobre Marco Antonio Pérez, integrante de la comisión directiva del sindicato, delegado congresal de FOTIA y afiliado al peronismo (en ese operativo también fue secuestrado su hijo, quien era sopletero del ingenio, su hija y su yerno). Antes de la interrupción democrática, se produjo un secuestro más, el de Miguel Soria, ex trabajador del ingenio, secretario del sindicato y secretario de actas de FOTIA.

Con el golpe de Estado, el sindicato del ingenio quedó en poder de los militares y fue convertido en un centro clandestino de detención. “No es casual que los militares hayan elegido el sindicato de los obreros del Ingenio Concepción como uno de los centros para la represión. Lo que antes era un

---

<sup>22</sup> *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*. tomo I, p. 51.

lugar para la coordinación de las protestas, ahora era utilizado como un ámbito de represión y disciplinamiento contra los trabajadores”.<sup>23</sup> El mismo día del Golpe fue desaparecido Manuel A. Tajan, tesorero del sindicato, su secuestro se produjo en su vivienda de la colonia N° 5 de Luisiana, propiedad del ingenio, lugar del que también serían secuestrados otros trabajadores; en abril igual destino tuvo Zoilo Reyes, secretario adjunto del sindicato obrero del Concepción. En abril de 1977 fue secuestrado y desaparecido Bernardo S. Villalba, quien ya no trabajaba en la fábrica azucarera pero había sido un histórico dirigente sindical y en 1973 resultó electo diputado nacional por el FREJULI. En julio fue secuestrado Fidelino W. Ruiz, delegado del ingenio; un mes después Lucio Valenzuela, Raúl Romero y Reyes Romero corrieron la misma suerte; en septiembre fue desaparecido Guillermo Rodríguez, delegado gremial de los obreros de surco. Otras víctimas se sucedieron a lo largo de ese año y las últimas diez se registraron en marzo de 1978. En síntesis, al menos once de 26 víctimas tenían vinculación con el sindicato como miembros de la comisión directiva y del cuerpo de delegados y algunos habían sido parte del consejo directivo de FOTIA. Así, la dirección sindical del ingenio Concepción fue sensiblemente desarticulada.

Asimismo, el informe de Responsabilidad empresarial señala que en el ingenio La Fronterita se registraron, al menos, 25 trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad. Dos de ellos fueron asesinados, nueve desaparecidos y 14 secuestrados y luego liberados. En esta fábrica el ciclo represivo se extendió entre octubre de 1974 y septiembre de 1976. La primera víctima fue asesinada previamente a la instauración del “Operativo Independencia” en octubre de 1974 y fue Félix Juárez, miembro del sindicato; en marzo de 1975 fue secuestrado Antonio Maciel, empleado y también integrante del sindicato; en julio fueron llevados los hermanos Gramajo, Justo y Rosendo, este último era tesorero del sindicato de obreros de surco; ese mismo mes fue secuestrado José Jacinto Sion, delegado de la sección caldera del ingenio, quien en la actualidad se encuentra desaparecido. Por su parte, Sixto Costa, jornalero y gremialista de La Fronterita y su hermano José fueron privados de su libertad en dos oportunidades. En mayo de 1976 fue secuestrado Francisco Ferro, quien trabajaba como pelador de caña junto a su familia, su hermano precisó que

“había una orden de que todos los trabajadores de la caña debían portar un carnet, que era expedido por los militares en el Ingenio La Fronterita (...) su hermano fue a sacar el carnet de identificación primero, para ganar tiempo, cuando estaba

---

<sup>23</sup> *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado.* tomo I, p. 53.



haciendo la cola para sacar el carnet le pidieron sus documentos, y lo apartaron de la fila diciéndole que su documento estaba adulterado (...) Lo sacaron esposado y lo llevaron hasta la Base que los militares tenían en la Laguna, en Fronterita”

En junio de 1976 se produjeron 8 secuestros contra trabajadores del ingenio. Entre ellos los hermanos Pisculiche, uno de ellos era tractorista y cosechero y el otro jornalero en Los Laureles; ambos se encuentran desaparecidos. Fidel Ortiz, quien había sido secretario general del sindicato y delegado ante la CGT en el congreso de FOTIA de julio de 1975 también fue secuestrado. En julio de ese año fue asesinado Héctor Ardiles y secuestrado Roberto Merchan, técnico mecánico del ingenio y en septiembre corrió la misma suerte Humberto González.

Como en otros espacios laborales, la represión, si bien estuvo dirigida y ejecutada mayoritariamente por el ejército, contó con la connivencia y el apoyo activo de grandes empresarios, que en una gran cantidad de casos denunciaron a sus trabajadores, entregaron fondos a las fuerzas represivas e, incluso, hasta autorizaron la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas.<sup>24</sup>

#### *La respuesta de los trabajadores. Huelgas, protestas y líneas de lucha*

Las respuestas de los trabajadores y de las agrupaciones sindicales ante la política económica y laboral de la dictadura fueron analizadas fundamentalmente desde dos perspectivas. Por un lado, historiadores como Francisco Delich, remiten a una imagen de completa inmovilidad y derrota por parte de las asociaciones gremiales durante el período. La mayor parte de la historiografía sobre el tema, por el contrario, cuestionó esa mirada y sostuvo que existió una amplia gama de actividades de resistencia y oposición. En este sentido, Pablo Pozzi no solamente cuestionó las apreciaciones de Delich respecto a la ausencia de conflictos sindicales frontales y de tipo “clásico” (huelgas), sino que además enfatizó la importancia de las acciones “subterráneas”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Un análisis exhaustivo de estas prácticas se encuentra detallado en los dos tomos de *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*.

<sup>25</sup> Medidas de protesta encubiertas llevadas adelante por grupos de trabajadores con reducida coordinación e impacto, incluían el “trabajo a tristeza,” el “trabajo a desgano” (reducciones del ritmo de trabajo), interrupciones parciales de tareas, sabotajes, y una multiplicidad de iniciativas tendientes a la organización de los trabajadores y al perjuicio de la patronal. (Basualdo, 2010)

Situada en un punto medio entre estos dos polos de discusión, la historiadora Victoria Basualdo propone articular los aportes de ambas “miradas”. Concluye, entonces que, como lo sostiene Delich, las políticas instrumentadas en el período tuvieron un efecto claramente perjudicial sobre la clase obrera industrial y marcaron un quiebre profundo en su historia. Sin embargo, como sostiene Pozzi, a pesar de este impacto claramente negativo y regresivo, es posible no sólo detectar la presencia de formas nuevas de organización y protesta, sino también cierta progresiva recuperación, en especial a partir de 1979, de formas de lucha tradicionales de la clase obrera argentina, aún en un contexto de profunda desarticulación y represión de la actividad sindical.

La reiteración de formas de organización y lucha “subterráneas”, que tuvieron un carácter en general fragmentario y disperso, evidencia una movilización de las bases que se combinó con formas de lucha más convencionales y características de la historia del movimiento obrero argentino, encabezadas por los sindicatos. (Basualdo, 2010)

En contraste con lo que sostenía Delich en su trabajo, fueron numerosas las instancias de protesta de los trabajadores desde los primeros días del régimen militar, y aumentaron en las coyunturas que posibilitaban mayor éxito. Del análisis de este último tipo de movilizaciones de protesta, pueden distinguirse dos etapas diferentes en la dinámica sindical durante la dictadura.

El primer período se caracterizó por una mayor fragmentación de las iniciativas de oposición abierta, una situación de enfrentamiento y diferenciación entre las corrientes sindicales y, sobre todo, por la elevada intensidad de la política represiva, que acalló y dio por concluidos conflictos importantes y promovió la desmovilización. En estos primeros años de lucha sindical contra la dictadura, es posible distinguir a un sector de dirigentes que cultivaron una relación de cercanía y apoyo a aquélla, y por otro, líderes moderados cuya posición se fue radicalizando frente a la connivencia de otros sindicalistas con el régimen. (Basualdo, 2010, p. 10). En lo que se refiere a cantidad de conflictos laborales, se observa un incremento progresivo de las protestas obreras –con la excepción del año 1978 en el que se evidencia un retroceso–; en 1976 se habrían desarrollado 89 conflictos, en 1977 habrían sido 100, de los que se habría bajado a 40 en 1978, para culminar, en 1979, con un pico de 188 conflictos. La mayor parte fueron, hasta 1979, paros y quites de colaboración y tuvieron como principal demanda el aumento de los salarios, aunque una minoría se propuso cuestionar las condiciones de trabajo y demandar la posibilidad de organización sindical (Basualdo, 2010, p. 12)

El año 1979 constituyó un momento de transición en el que pudo concretarse la convocatoria a la primera huelga general convocada por uno de

los segmentos en que se había fragmentado el movimiento sindical.<sup>26</sup> En abril de 1979, en un contexto de agitación creciente,<sup>27</sup> el 27 de abril de 1979 convocaron a una “jornada de protesta” sin concurrencia al trabajo bajo las consignas de defender la industria nacional, revisar la política arancelaria y restituir el poder adquisitivo del salario.

El hecho de que la convocatoria partiera de un solo sector no quitó cohesión y organización al movimiento sindical. La medida cobró una extensión y fuerza inusitadas. Alcanzó repercusión nacional, replicándose en casi todas las ciudades del interior. Sin embargo, al día siguiente del paro, *La Gaceta* señaló que ninguna organización sindical tucumana se había plegado a la medida de fuerza; información corroborada por el coordinador del Ferrocarril Belgrano, quien declaró que en todas las dependencias de la línea se había trabajado normalmente y por las autoridades del Ferrocarril Mitre que precisaron lo mismo. Por su parte, la Delegación Regional de Trabajo hizo llegar un comunicado en el que confirmaba “la actividad totalmente normal” que había primado en la provincia.<sup>28</sup> Sin duda, este tipo de información debe contrastarse con investigaciones que permitan conocer las formas alternativas que asumió la lucha obrera. En tal sentido, recuperamos la sugerencia de Victoria Basualdo para subrayar la necesidad de investigaciones que desanden las estrategias subterráneas y fragmentarias de los trabajadores, muchas de las cuales recuperaron las prácticas de la “resistencia peronista” y se expresaron en forma de sabotajes o trabajo a desgano. Estos problemas, así como la forma en que la protesta comenzó a articularse de forma abierta y masiva, sobre todo a partir de esta huelga, esperan ser recuperados a fin de contar con una mirada compleja del mundo del trabajo provincial.

El segundo período se abrió con el primer paro general (1979) y culminó con la transición a la democracia en diciembre de 1983. Estuvo signado por la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, al tiempo que se caracterizó por intentos fallidos de unificación de las tendencias sindicales, por una disminución significativa de la intensidad de la política represiva, y por el surgimiento de nuevos espacios para la organización, que permitieron que las formas de lucha se extendieran y se volvieran crecientemente masivas. (Basualdo, 2010, p. 14). La participación de representantes argentinos en el Encuentro Internacional de la OIT (1979); la efímera organización de CCTA (Conducción Cívica de Trabajadores Argentinos) y la restitución de la CGT en 1980 (CGT “Brasil”) en abierto desafío a las normativas de la dictadura,

---

<sup>26</sup> Fue convocada y llevada adelante por la “Comisión de los 25” con la oposición de los sectores “participacionistas” nucleados en la Confederación Nacional de Trabajadores (CTN).

<sup>27</sup> Uno de los conflictos más resonantes fue el de Alpargatas: los 3.800 obreros de la planta de Barracas decretaron en asamblea en la puerta de la fábrica un paro por tiempo indeterminado, desoyendo las amenazas oficiales (Basualdo, 2010, p. 12).

<sup>28</sup> *La Gaceta*, 28 de abril de 1979.

constituyen algunos ejemplos del fortalecimiento del movimiento sindical y sus avances en procura de la reunificación.

A partir de mediados de 1981 las protestas sindicales se fueron sucediendo de manera más frecuente y fueron adquiriendo un carácter cada vez más masivo. Se realizó una segunda huelga general con muy alto acatamiento el 22 de julio de 1981, a raíz de la cual el gobierno detuvo a gran cantidad de sindicalistas involucrados en su organización. El 7 de noviembre de 1981 se realizó la primera movilización popular contra la dictadura que no se restringió al ámbito sindical pero en la cual éste tuvo presencia central.<sup>29</sup> El 30 de marzo de 1982, sólo dos días antes de la declaración de guerra a Gran Bretaña por las Islas Malvinas, se realizó una huelga y marcha a Plaza de Mayo a la que concurrieron 30.000 personas y que terminó con graves disturbios y numerosas detenciones. Tanto la movilización como su violenta represión se replicaron en toda la geografía nacional (Rapoport, 2000).

Después de la derrota argentina en Malvinas, el movimiento de protesta por el descenso en las condiciones de vida de los asalariados, el cierre de fábricas y el incremento del desempleo, no hicieron más que aumentar: el 16 de diciembre de 1982 la Multipartidaria convocaba a la Marcha por la Democracia, a la que asistieron 100.000 personas; en 1983, cuando ya era público el llamado a elecciones y el fin de la dictadura, se realizaron dos paros generales (el 28 de marzo y el 4 de octubre). La transición a la democracia estaba en camino. (Basualdo, 2010, p. 16).

## **Conclusiones**

Sintetizar el derrotero de la clase trabajadora tucumana entre 1955 y 1983, especialmente la azucarera, supone recuperar una historia signada por la represión, las intervenciones sindicales, las políticas de desmantelamiento del aparato productivo y la articulación de diversas formas de movilización y resistencia obrera. Sobre el telón de fondo que implicaron las recurrentes e irresueltas crisis azucareras, el año 1966 constituyó un parteaguas en la historia de los trabajadores, el cierre masivo de 11 de los 27 ingenios fue una dramática experiencia en la que convergieron resistencias, movilizaciones y puebladas destinadas a defender la fuente de trabajo pero también sensibles procesos migratorios, obligados éxodos que mermaron demográficamente a la provincia. En este contexto, de desarticulación productiva y laboral desde 1975

---

<sup>29</sup> El sindicalismo “confrontacionista” buscó confluir con la Iglesia llamando a una marcha a San Cayetano (santo del trabajo de acuerdo a la religión católica) bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo.” Numerosos partidos políticos y organizaciones sociales adhirieron a la medida y a pesar de la fuerte represión, de la intimidación en los medios de comunicación y del sitio establecido por las fuerzas de seguridad, más de 10.000 personas participaron de la movilización (Basualdo, 2010, p. 15)

y, particularmente, durante los primeros años de la dictadura, la clase trabajadora fue una de las principales víctimas de la represión: secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones se abatieron sobre dirigentes sindicales y el conjunto obrero, quienes debieron articular diversas formas de organización y resistencia que, para el caso tucumano, esperan ser recuperadas con sistematicidad.

## BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

### Bibliografía

Aranda Nelly Cristina, *El cierre de los ingenios azucareros en Tucumán y su efecto social. El caso del ingenio mercedes*, tesis de licenciatura inédita, Licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2009.

Aroskind, Ricardo (2003), "El país del desarrollo posible", en James, Daniel (Dir.), *Violencia, Proscripción y Autoritarismo (1955-1976)*, Col. Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Buenos Aires: Sudamericana.

Matías Artese, y Gabriela Roffinelli: "Guerra y genocidio en Tucumán (1975-1983)", en Izaguirre, Inés (ed): *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, 1973-1983: Antecedentes, desarrollo, complicidades*, Buenos Aires, EUDEBA, 2009, pp.311-336.

Azcoaga, Germán (2014a) "La FOTIA y la huelga azucarera de 1959: el movimiento obrero tucumano ante el comienzo de la crisis", ponencia presentada en Vº Reunión del Comité Académico "Historia, Regiones y Fronteras", Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM), Universidad Nacional de Mar del Plata

Azcoaga, Germán (2014b) "La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y el gobierno de Celestino Gelsi entre 1959 y 1960", ponencia presentada en IVº Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014), Tucumán.

Azcoaga, Germán (2016) "Acciones colectivas y resistencia en el interior tucumano durante la 'Revolución Argentina' (1966-1973)" ponencia presentada en Jornadas de Historia y Memoria: "1966: Tucumán y el cierre de los ingenios azucareros", organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Ramón Leoni Pinto", Universidad Nacional de Tucumán.

Basualdo, Victoria: "Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: 1943-2007", en Azpiazu, Daniel, Martín Schorr y Victoria Basualdo: *La industria y el sindicalismo de base en la Argentina*, Buenos Aires, Cara o Ceca, 2010, pp. 81-157.

Bolsi, Alfredo S. C. y J. Patricia Ortiz de D'Arerio (2001), *Población y Azúcar en el Noroeste Argentino. Mortalidad infantil y transición demográfica durante el siglo XX*, Tucumán: Instituto de Estudios Geográficos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.

Bolsi, Alfredo y Roberto Pucci (1997), "Evolución y problemas de la agroindustria del azúcar". En Alfredo Bolsi (Dir.): *Problemas agrarios del Noroeste Argentino*, Universidad Nacional de Tucumán – Junta de Andalucía. San Miguel de Tucumán. Pp. 113-133.

Boneo, H.; M. Cavarozzi; N. Lavergne y G. Picabea (1973), *Análisis y evaluación del plan de transformación agro-industrial de la provincia de Tucumán*. Informe Final. Serie Técnica N° 17, Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires.

Campi, D; Parolo, M.P y Bravo, M.C; *Breve Historia de Tucumán. Desde su fundación hasta el siglo XXI*, inédito, Tucumán, 2012

Canitrot, Adolfo y Juan Sommer (1972), *Diagnóstico de la situación económica de la provincia de Tucumán*, Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires.

Centurión, Josefina (2004) “El sindicalismo tucumano ante la caída de Perón. Respuestas y perspectivas políticas. Tucumán, 1955-1959”, Mimeo.

Centurión, Josefina (2005) “Sindicalismo y política entre la Resistencia y la radicalización. Los trabajadores de Tucumán y sus organizaciones entre 1955 y 1966”, ponencia presentada en X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.

Centurión, Ana Josefina (2012) “El largo y conflictivo prelude de la fractura social en Tucumán: proscripción, inestabilidad y movilización, 1956-1966”, en VV.AA, *Historia Contemporánea de las provincias del NOA (1930-2001)*, Tomo II, Academia Nacional de la Historia, Universidad Nacional de Catamarca, 2012

Crenzel, Emilio A. (1997), *El Tucumanazo*, Facultad de Filosofía y Letras – UNT, San Miguel de Tucumán.

Gaignard, Romain (2011) “Una especulación tropical en crisis: las plantaciones de caña de azúcar en Tucumán (Argentina)”, *Travesía. Revista de Historia Económica y Social*, N° 13, Universidad Nacional de Tucumán.

James, Daniel (2005). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Siglo XX editores.

Jemio, Ana Sofía (2012): ““FOTIA, sus sindicatos y afiliados”. Una aproximación a los marcos discursivos y propuestas programáticas de la clase obrera azucarera tucumana en 1963”, en CD *III Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos “Movimientos Sociales, Estados y Partidos Políticos en América Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia”*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, 28-30 de noviembre de 2012, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Lobato, Mirta: *Historia de las trabajadoras en la Argentina, (1869-1960)*, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

Medina Ramón D. (1974), *Análisis cuantitativo de la economía de Tucumán en el período 1966-1971*, Facultad de Ciencias Económicas – UNT, San Miguel de Tucumán.

Mercado, Lucía (2005), *Santa Lucía de Tucumán: La Base*, Indugraf SA, Buenos Aires.

Mercado, Lucía. *El Gallo Negro. Vida, pasión y muerte de un ingenio azucarero*, Producciones Gráficas, Tucumán, 1999.

Murmis, Miguel y Waisman, Carlos (1969), “Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera, la industria azucarera tucumana; en *Revista Latinoamericana de Sociología* Nº 1, abril 1969, Buenos Aires.

Nassif, Silvia (2016) *Tucumán en llamas. El cierre de los ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1963-1973)*, HUMANITAS-Colección Tesis, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.

Osatinsky, Ariel y Paolasso, Pablo (2007) "Las transformaciones económicas y sociales de Tucumán en la década de 1960", en *Actas VIII Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales en el Marco del Plan Fénix-I Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales*, [en línea] <http://www.econ.uba.ar/planfenix/index2.htm>.

Pucci, Roberto (2007) *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966*, Ediciones del Pago Chico, Buenos Aires.

Ramos Ramírez, Antonio (2012): “Entre Onganía y el “Operativo Independencia”. Los vericuetos del sindicalismo docente tucumano, 1966-1976” en Rubio Durán, Francisco Antonio (ed): *Retazos de la Pluralidad Perspectivas de la realidad histórica latinoamericana*, Sevilla, Aconcagua Libros.

Ramos Ramírez, Antonio (2011): “Sindicalismo docente en Tucumán: lucha gremial y politización, 1973-1976”, en *Aletheia*, vol. 1, número 2.

Reyes, Viviana; Rodríguez, Juan y Quintana, Edgardo “34 años del pueblo-cooperativa Campo de Herrera: recuperación de la mística que nos dio vida”. Informe final, Proyecto financiado por el Fondo Mink'a de Chorlavi ([www.FondoMinkaChorlavi.org](http://www.FondoMinkaChorlavi.org)), s/f.

Romano, Graciela (2009) *Benito, azúcar y sangre. FOTIA y la huelga azucarera de 1959. Desde sus primeras luchas reivindicativas hasta 1962*, Ediciones del autor, Buenos Aires,

Torre, Juan Carlos (2004) *El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976*, Siglo XXI, Buenos Aires.



## **Fuentes**

***Entrevistas y testimonios*** (extraídos de Aranda Nelly Cristina, *El cierre de los ingenios azucareros en Tucumán y su efecto social. El caso del ingenio mercedes*, tesis de licenciatura inédita, Licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2009).

- Víctor Pistán, ex obrero del ingenio, entrevista realizada el 03-08-2007.
- Alejandro Chazarreta, ex obrero del ingenio, entrevista realizada 07-08-2007.
- Raúl y Alejandro Chazarreta, ex obreros del ingenio Mercedes. Entrevista día 22 de setiembre de 2007.
- Celia de Nieva esposa de un ex obrero del ingenio Mercedes Entrevista realizada el 10-07-2007
- José Carmona, ex obrero que trabajaba en las colonias del ingenio Mercedes. Entrevista realizada el 10-07-2007.
- Monteros de Súcar, docente del Ingenio Mercedes y sus colonias. Entrevista realizada el 20 Agosto de 2007.
- Josefa de Brahim, Comerciante, entrevista realizada el 30 de agosto de 2007.
- Julio César Rodríguez. Entrevista realizada el 25 de Setiembre del 2007.

## **Publicaciones oficiales**

*Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, Boletín Estadístico, 1952.*

*Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, Censo de Población y Vivienda, 1968, Tucumán, 1969.*

*Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, Estadísticas vitales: 1970.*

*Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, Encuestas de empleo y Desempleo: 1966, 1971, 1972.*

*INDEC, Boletín Estadístico Trimestral, abril/junio 1975.*

*INDEC, Censo Nacional de Población 1960.*

*Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*, tomo 1, Buenos Aires, Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015.

### ***Prensa y revistas***

*Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los derechos humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983)*, Salamanca, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, 1991.

*Diario La Gaceta*

*La Industria Azucarera*